

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

42ª REUNION — 3ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA —
DICIEMBRE 21 Y 22 DE 1994

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero y Horacio Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
BIHAGGLE, Carlos Enrique
CENOLAZA, Florencio Gilberto
CHEM, Antonio
DAIME, Felipe Teófilo
LBAMONTE, Alberto G.
LBERTI, Juan Carlos
LCALA, Néstor Ricardo
LGABA, Ernesto Pedro Andrés
LVAREZ, Carlos Alberto
LVAREZ, Carlos Raúl
LVAREZ ECHAGUE, Raúl Angel
LVAREZ GARCÍA, Normando M.
NTELO, José María
RAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes
RANDA, Saturnino Dantti
RGUELLO, Jorge Martín Arturo
RIAS, César
RMENDARIZ, Alejandro
RRECHEA, José Salvador
YALA, Susana Beatriz
YETZ, Liliana
ALESTRA, René Helvecio
ALESTRINI, Alberto Edgardo
ALESTRINI, Miguel Alberto
ALTER, Carlos Mario
ARBERA, Eliseo
ARBOTTI, Atilio Ector
ARRIONUEVO, Eduardo E.
LUM, Daniel
ECERRA, Carlos Armando
ECERRA, Nicolás Eduardo
ENEDETTI, Jorge Enrique
INZI, María Cristina
RHONGARAY, Antonio Tomás
RMUDEZ, María del Pilar
ANCHI SILVESTRE, Marcela
ININO, Miguel Ángel
NOMI, Silvia Mónica
ORDA, Osvaldo
ACCHI, Osvaldo Américo
ANDA, Carlos Ernesto
ESER, Adalberto Edgardo
UNELLI, Naldo Raúl A.
UZZO, Omar Obdulio
L. RICH, Patricia
SSI, Antonio Domingo
BROWN, Juan Carlos

CALLABA, Anibal
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CÁMARA, Mario Angel
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Anibal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CERDERA, Rogello Rafael
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELÍA, Roberto Antonio
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESCOBAR, Jorge Alberto
ESTEVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNANDEZ GILL, Guillermo
FERNANDEZ MEJIDE, Graciela
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GARCIA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Delfor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafín
HARDY, Anibal Osvaldo

HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRECHE, Julio César
ITURRE, César Eusebio
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENECHINI, Javier Raynaldo
MERCADER, Martha Evelina
MENEM, Carlos Omar
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLARDO, Elvio Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro

MULLER, Mabel Hilda
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 NINO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PARADA, Alberto
 PAROLA, José María
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELAEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Anibal Pedro
 PEREZ, Jorge Teimo
 PERNASETTI, Horacio F.
 PERRINI, Gioconda Eulalia
 PESCE, Félix
 PICCININI, Ana Ida
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINOLINO, Héctor Teodoro
 PIÑAT, Alfredo Ernesto
 PIRE, Ricardo Horacio
 PLODRIGO, Esteban Joaquín
 PLODRIGUEZ, Jesús
 PLODRIGUEZ, Mabel E.
 PLODRIGUEZ SANUDO, Hugo B.
 PLODRIG, Ángel
 PLODRIGO, Rubén Darío

ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUIZ PALACIOS, José David
 SAADI, Ramón Eduardo
 SALINO, María Antonia
 SAMPIETRO, Darci
 SANTIN, Eduardo
 SARQUIZ, José Alberto
 SCELZI, Carlos José
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando E.
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 SUCARIA, Neyer
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOGNI de VELY, Adriana
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TRETTEL MEYER, Raúl
 TROYANO, Silvia Elena
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Ángel
 VARELA CID, Eduardo
 VÁZQUEZ, Roberto
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 ZAVALIA, José Luis
 ZICARELLI, Orlando A.
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

FAYAD, Víctor Manuel
 KAEHLER, Ernesto Rolando
 SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
 SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON LICENCIA
PENDIENTE DE APROBACION DE
LA HONORABLE CAMARA:

ALSOGARAY, Alvaro Carlos
 BRAVO, Alfredo Pedro
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 PINTO, Guillermo
 RICO, Aldo
 ROGGERO, Humberto Jesús
 STORANI, Federico

AUSENTES, CON AVISO:

ALENDE, Oscar Eduardo
 BISCHOF, Enrique Alberto
 CAMPERO, Rodolfo Martín
 CARCA, Elisa Beatriz
 DEL FABRO, Lilián
 FALLETI, Julio César José
 FOLLONI, Jorge Oscar
 GALLO, Orlando Juan
 GARAY, Nicolás Alfredo
 GONZALEZ, Antonio Erman
 GUZMAN, María Cristina
 MARTÍNEZ, Manuel Luis
 MURIEL, Néstor Jorge
 PARAJÓN, José María
 POLO, Luis Nicolás
 RODRÍGUEZ, José
 ROY, Irma
 VITAR, José Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preparatoria de fecha 11 de mayo de 1994.

SUMARIO

I. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 4892.)

II. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 4892.)

Asuntos cuya votación conjunta dispuso la Honorable Cámara:

I. Dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Agricultura y Ganadería, de Ciencia y Tecnología y de Finanzas en el proyecto de declaración de los señores diputados Abihaggle y Lafalla por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la adopción de medidas destinadas a resolver la crisis socioeconómica que enfrenta la localidad de Monte Comán, provincia de Mendoza, en razón de la reducción de la actividad ferroviaria (2.851-D.-94). (Página 4898.)

II. Dictamen de la Comisión de Juicio Político en los pedidos de formación de causa a las señoras juezas doctoras Milagros Ferro Puch, Angeles Beatriz de Ibarreta, Cristina Ercilia Ibáñez de

Quintana y Beatriz Celia Marino, titulares de los juzgados nacionales del trabajo números 6, 15, 16 y 17 (2.779-D.-92; 1.474 y 1.506-O.V.-92; 12, 123, 153 y 297-O.V.-93; 528-P.-92 y 18-P.-93). (Pág. 4899.)

III. Dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Tercera Edad en el proyecto de declaración del señor diputado Galante y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo la incorporación, como servicio del PAMI, de un plan de trabajo de gimnasia para la tercera edad (4.287-D.-94). (Pág. 4909.)

IV. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de declaración del señor diputado D'Elia por el que se expresa beneplácito por el triunfo de la tenista Gabriela Sabatini en el Torneo de Maestras realizado en la ciudad de Nueva York (5.065-D.-94). (Pág. 4910.)

V. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución de los señores diputados Alvarez (C. R.) y Parada por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre el desarrollo de

XXXVII. Proyecto de declaración del señor diputado Corchuelo Blasco por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga prever la posibilidad de instalar un sistema de señalización que permita a los usuarios del servicio telefónico el control de los pulsos que componen la liquidación de sus tarifas (1.668-D.-94). (Pág. 4954.)

XXXVIII. Dictamen de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de resolución de la señora diputada Carca por el que se declara de interés parlamentario el Seminario Internacional "El derecho y los chicos: balance y perspectiva de las reformas legislativas" que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires (5.437-D.-94). (Pág. 4955.)

XXXIX. Proyecto de resolución del señor diputado Leconte por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la reparación de las instalaciones de CO.TE.CAR. en Paso de los Libres, provincia de Corrientes (5.555-D.-94). (Pág. 4956.)

XL. Dictamen de las comisiones de Legislación General, de Cultura, de Industria y de Asuntos Municipales en el proyecto de ley del señor diputado Ibarreche sobre régimen de depósito de obras impresas en número suficiente para ser destinadas a bibliotecas nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como requisito para la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual (1.124-D.-94). (Página 4956.)

XLI. Proyecto de ley de los señores diputados Polino, Bravo, Solanas, Fabrisin, Mendoza (M.), Flores y González Gaviola sobre ampliación del presupuesto de las instituciones de la seguridad social para el ejercicio 1995 (5.436-D.-94). (Página 4958.)

XLII. Proyecto de ley en revisión por el que se acuerda autorización al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 1995 (119-S.-94). Se sanciona definitivamente (ley 24.439). (Pág. 4959.)

XLIII. Proyecto de ley de señor diputado Teodosiu y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires (1.665-D.-94). (Pág. 4959.)

XLIV. Dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (141-S.-93). (Pág. 4960.)

XLV. Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley del señor diputado D'Alessandro y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Villa María, provincia de Córdoba (3.640-D.-93). (Pág. 4962.)

XLVI. Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de ley del señor diputado Pepe y otros sobre creación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires (3.197-D.-93). (Pág. 4965.)

XLVII. Dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Municipales y de Familia, Mujer y Minoridad en el proyecto de declaración de la señora diputada Rubini por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga declarar de interés nacional el Programa Cuidar Cuidando del Hospital Infantojuvenil "Carolina Tobar García", en el ámbito del Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires (4.837-D.-94). (Página 4966.)

XLVIII. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 3.I a 3.XLVII de este sumario. Se sancionan. (Pág. 4967.)

4. Moción de orden formulada por la señora diputada Zuccardi de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de rendir homenaje a la memoria de la ex senadora nacional Margarita Malharro de Torres. Se aprueba. (Pág. 4967.)

5. Homenaje a la memoria de la ex senadora nacional Margarita Malharro de Torres. (Pág. 4967.)

6. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional y reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (55-P.E.-94). Se aprueba en general y se resuelve el aplazamiento de la consideración en particular. (Pág. 4970.)

7. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica el régimen del contrato de trabajo (57-P.E.-94). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4998.)

8. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión sobre Código Nacional Electoral (158-S.-94). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 5034.)

Sr. Viechi. — Señor presidente: con sencillas palabras quiero rendir el más cálido homenaje a la mejor expresión de humildad y trabajo por los demás.

Margarita Malharro de Torres fue mi vieja maestra y la de generaciones de hombres y mujeres que de su mano comenzamos a caminar las calles para expresar nuestras ideas.

Por sobre todas las cosas Margarita Malharro de Torres era una abanderada de la libertad, y en las peores épocas de la dictadura nos recomendaba hablar con la gente para transmitir nuestras ideas en la convicción de que siempre podía existir un futuro mejor. En esas noches negras era necesario tener mucha fuerza de voluntad, un gran valor y una profunda convicción para hacer ese tipo de trabajo.

Margarita fue la abanderada de los abanderados; una gran militante política que prestigió a los políticos argentinos. Su humilde conducta prestigia no sólo a los argentinos en todas las áreas de trabajo, sino también al género humano. Fue realmente una persona muy grande (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia invita a los señores diputados a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la ex senadora Margarita Malharro de Torres.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Con las palabras pronunciadas por los señores diputados, queda rendido el homenaje de la Honorable Cámara a la memoria de la ex senadora Margarita Malharro de Torres.

6

REGIMEN DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia recaído en el proyecto de ley sobre régimen de solidaridad previsional, reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, procedimiento judicial de la Seguridad Social, creación de tres salas en la Cámara Federal de la Seguridad Social, reforma presupuestaria y financiera, y extensión de la Solidaridad Previsional (expediente 55-P: E-94).

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia han tomado en consideración el mensaje 1.922, y proyecto de ley de régimen de solidaridad previsional, reforma al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241), procedimiento judicial de la seguridad social, creación de tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, reforma presupuestaria y financiera y extensión de la solidaridad previsional; y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

TÍTULO I

De las reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

CAPÍTULO I

Reformas a la legislación previsional

Artículo 1º — Modifícase el artículo 17 de la ley 24.241, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 17: El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:

- a) Prestación básica universal;
- b) Prestación compensatoria;
- c) Retiro por invalidez;
- d) Pensión por fallecimiento;
- e) Prestación adicional por permanencia.

En ningún caso las prestaciones a cargo del Régimen de Reparto en favor de cada beneficiario podrán ser inferiores a los importes mínimos o superar los importes máximos establecidos o que se establezcan anualmente por medio de la ley.

Art. 2º — Los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la ley Nº 24.241 que no tuvieron otro haber máximo menor, en la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, prevista en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 18.037, modificado por el artículo 158 apartado 1 de la ley 24.241, estarán sujetos a la siguiente escala de deducciones:

—De \$ 3.101 a \$ 4.000: 6 % sobre el excedente de \$ 3.100.

—De \$ 4.001 a \$ 6.000: \$ 54 más el 12 % sobre el excedente de \$ 4.000.

—A partir de \$ 6.001: \$ 294 más el 30 % sobre el excedente de \$ 6.000.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar la escala precedente a las movilidades que resulten de la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones.

Art. 3º — Modifícase el artículo 34 de la ley 24.241 modificado por el artículo 1º de la ley 24.347 de la siguiente forma:

Modifícase el inciso 3, que quedará redactado de la siguiente forma:

3. Los beneficiarios de prestaciones previsionales que hubieran accedido a tales beneficios amparados en los regímenes especiales para quienes presten servicios en tareas penosas, riesgosas, insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, no podrán reingresar a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen a su beneficio previsional. Si así lo hicieran, se les suspenderá el pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional otorgado.

Art. 4º — La presente ley es federal y de orden público. La misma se aplicará aun a los efectos pendientes de las situaciones jurídicas existentes, debiendo reducirse cuando corresponda los haberes de las prestaciones ya otorgadas, respecto a los períodos posteriores a su entrada en vigencia. No se aplicará retroactivamente respecto a haberes correspondientes a períodos anteriores a su entrada en vigencia.

CAPÍTULO II

Reforma al procedimiento judicial de la seguridad social

Art. 5º — El procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de Seguridad Social, se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

Art. 6º — Las resoluciones de la Administración Nacional de Seguridad Social podrán ser impugnadas ante los juzgados federales en lo contencioso-administrativo de la Capital Federal y ante los juzgados con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previstos en el artículo 25, inciso a) de la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno, que transitará por las reglas del proceso sumario previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas en la presente ley. La Administración Nacional de Seguridad Social actuará como parte demandada.

Art. 7º — La Administración Nacional de Seguridad Social podrá articular en su defensa la limitación de recursos en el Régimen de Reparto para atender el mayor gasto que se derivaría del acogimiento de las pretensiones del actor y su eventual extensión a los casos análogos.

Art. 8º — Sólo se admitirán los medios probatorios documentales, testimoniales, periciales, de informes los que el tribunal dispusiere para mejor proveer, salvo que la Administración Nacional de Seguridad Social articulara la defensa de limitación de recursos en el Régimen de Reparto, en cuyo caso se admitirá también la prueba pericial correspondiente, a ser diligenciada por integrantes del cuerpo de peritos o funcionarios de la Auditoría General de la Nación.

Art. 9º — La Cámara Nacional de Apelaciones de Seguridad Social, creada por ley 23.473, se transformará en Cámara Federal de la Seguridad Social conocerá en la materia enumerada en el artículo 39 b) del decreto ley 1.285/58, con la salvedad de que el lo concerniente del inciso a) de dicho artículo interviendrá en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los juzgados mencionados en el artículo 8

Art. 10. — La sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas.

Art. 11. — Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiere pronunciado reiteradamente en casos análogos respecto a la aplicación de la presente ley, podrá rechazar *in limine* el recurso interpuesto sin otra fundamentación.

Art. 12. — Las costas serán por su orden.

Art. 13. — Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de Seguridad Social serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciere dicho plazo. Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento. La Administración Nacional de Seguridad Social deberá respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas para su cumplimiento, salvo cuando queden sentencias pendientes de cumplimiento para el siguiente período fiscal, en cuyo caso dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Serán de aplicación las leyes 23.982 y 24.130, y supletoriamente la ley 3.952.

Art. 14. — En ningún caso los jueces podrán fijar un plazo distinto para el cumplimiento de las sentencias, ni aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas o conminatorias a los organismos respectivos, ni a los funcionarios competentes, salvo en los casos de amparo por mora. Quedan sin efecto las medidas de ese tipo que se hubieren adoptado o trabado. Los bienes y cuentas de la Administración Nacional de Seguridad Social o del Estado nacional son inembargables. Las autoridades administrativas competentes deberán tramitar de inmediato la interrupción o el levantamiento de las medidas

compulsivas, cautelares o ejecutorias dispuestas con anterioridad a la presente ley, incluyendo las trabadas respecto a los bienes afectados al servicio de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Art. 15. — Las normas previstas en el presente capítulo serán de aplicación inmediata a las causas en trámite. Las que estuvieren radicadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, pendientes de sentencia, serán convertidas al procedimiento previsto en la presente ley, notificando a los recurrentes para que adecuen su presentación al nuevo procedimiento, solicitando lo que en derecho corresponda. En estos casos, y por única vez, la Administración Nacional de Seguridad Social tendrá un plazo de seis (6) meses para contestar demanda y ofrecer pruebas, contados a partir de su notificación.

Art. 16. — Las sentencias dictadas o que se dicten en esta materia contra la Administración Nacional de la Seguridad Social o el Estado nacional hasta el 31 de diciembre de 1995, que la condenen al pago de sumas de dinero, serán cumplidas recién a partir del 1º de enero de 1996, de acuerdo al procedimiento previsto en la presente ley.

Art. 17. — Modifícase el artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58 que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 39 bis: La Cámara Federal de la Seguridad Social conocerá:

- a) En los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en las causas sustanciadas con motivo de impugnaciones judiciales contra resoluciones o actos administrativos que afecten pretensiones de los afiliados, beneficiarios, peticionarios de prestaciones o de afiliación, empleadores y, en general, de cualquier persona que alegare la afectación de su derecho respecto del régimen de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
- b) En los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Dirección General Impositiva que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda determinadas por el citado organismo en ejercicio de las funciones asignadas por el decreto 507/93, siempre que en plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada;
- c) En los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios familiares;
- d) En los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de la Comisión Nacional de Previsión Social, al decidir conflictos suscitados con motivo de la aplicación del régimen de reciprocidad instituido por el decreto 9.316/46.

- e) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el artículo 28 de la ley 19.549.

Art. 18. — Modifícase el artículo 9º de la ley 23.473, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 9º: Los recursos contencioso-administrativos enumerados en los incisos b), c) y d), del artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58 deberán presentarse con firma de letrado y con expresión de agravios ante el mismo organismo administrativo que dictó la medida y dentro de los treinta (30) días de notificada si el interesado se domiciliare en la Capital Federal y de noventa (90) días si se domiciliare en el interior del país o en el extranjero. Si el interesado se domiciliare en el interior del país, podrá optar por presentar el recurso ante el juez federal de su domicilio, quien remitirá las actuaciones a la Cámara.

Art. 19. — Modifícase el artículo 11 de la ley 23.473, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y previa vista al ministerio público si la estimare necesaria, la Cámara Federal de la Seguridad Social resolverá en cada caso sobre la procedencia del recurso, de acuerdo a las constancias del expediente, sin perjuicio de las medidas que de oficio y para mejor proveer dispusiere. El control judicial recaerá sobre los hechos de las causas y el derecho aplicable.

Art. 20. — Derégase el artículo 14 de la ley 23.473.

TÍTULO II

Reforma presupuestaria y financiera

CAPÍTULO I

Modificaciones presupuestarias

Art. 21. — Amplíase en la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) el presupuesto de las instituciones de la seguridad social, Administración Nacional de Seguridad Social, para el ejercicio 1994, con destino a la finalidad servicios sociales y gastos corrientes, según detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 22. — Amplíase en la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) el importe correspondiente a gastos figurativos para transacciones corrientes de la administración central, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional de Seguridad Social, en la misma suma.

Art. 23. — Como consecuencia de lo establecido en los artículos 21 y 22, amplíase en la suma de hasta quinientos millones de pesos (\$ 500.000.000) la fuente de

financiamiento de la administración central, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 24. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer las modificaciones que estime necesarias de los montos aprobados por los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la ley 24.307 y la ampliación dispuesta por el artículo 21 de la presente ley.

Art. 25. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer un incremento hasta el monto previsto en el artículo 23 de la presente ley, en las operaciones de crédito público autorizadas en la planilla 10, anexa al artículo 9º de la ley 24.307, correspondientes a la deuda instrumentada de la administración central, y a efectuar las reestructuraciones en dicha planilla que considere necesarias para su adecuación a las condiciones imperantes en los mercados.

Art. 26. — La Administración Nacional de Seguridad Social deberá destinar una parte de su superávit financiero anual para atender las contingencias judiciales una vez vencido el plazo de suspensión dispuesto en esta ley, sin afectar el financiamiento de las prestaciones ordinarias.

CAPÍTULO II

Otras disposiciones

Art. 27. — Sustitúyese el inciso a) del punto 1 del artículo 4º del decreto 879 del 3 de junio de 1992, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307, con efectos retroactivos al 1º de julio de 1994, por el siguiente texto:

- a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, déjase sin efecto el inciso b) del artículo 1º del decreto 1.985 de fecha 26 de octubre de 1992.

Art. 28. — A partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley, serán íntegramente destinados al otorgamiento de subsidios a jubilados y pensionados del régimen contributivo nacional que perciban los menores haberes por todo concepto incluidos los subsidios ya vigentes los recursos provenientes de la recaudación del impuesto establecido en los artículos 65 y 66 del capítulo IV del título II de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones.

Art. 29. — La atención de los compromisos derivados del financiamiento de los pasivos del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER) se realizará mediante la entrega de bonos de consolidación en moneda nacional a dieciséis (16) años, creados por la ley 23.982, facultándose al Poder Ejecutivo nacional para proceder a su emisión con tal finalidad.

Art. 30. — Excepto lo dispuesto en el artículo 28, la presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 21 de diciembre de 1994.

Carlos A. Sueiro. — Oscar S. Lambert. — Alberto G. Albamonte. — José L. Gioja. — Salomón A. Michitte. — Eduardo O. Camaño. — Carlos E. Sorka. — Ana R. Kessler. — Miguel H. D'Alessandro. — Marcelo J. Muniagurria. — Horacio A. Macedo. — Carlos J. Scelzi. — Carlos F. Dellepiane. — Carlos E. Branda. — Francisco de Durañona y Vedia. — Osvaldo A. Bracchi. — Raúl A. Alvarez Echagüe. — Rogelio R. Cerdera. — César Arias. — Mirta E. Rubini. — Carlos A. Sueiro. — Alejandro Armendáriz. — Juan C. Crostelli. — José L. Castillo. — María C. Benzi. — Delfor L. Giménez. — Miguel A. Bonino. — Orlando A. Zicarelli.

En disidencia parcial:

Oscar A. Machado. — Carlos A. Becerra. — Eduardo Santín. — Jesús Rodríguez. — Walter A. Ceballos. — Marcelo B. Muñoz. — Augusto J. Spinoza. — Carlos E. Gómez Centurión. — Carlos E. Abilhagge. — Juan O. Gauna. — Horacio F. Pernasetti. — Raúl Trettel Meyer. — Juan C. Maqueda. — Enrique J. Mathov. — Javier R. Meneghini. — Elsa D. Kelly. — Ricardo E. Marcos. — Leopoldo M. Orquín. — Carlos A. Becerra.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Previsión y Seguridad Social y de Justicia, al considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de solidaridad previsional, reforma al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241), procedimiento judicial de la seguridad social, creación de tres salas en la Cámara Federal de la Seguridad Social, reforma presupuestaria y financiera y extensión de la solidaridad previsional, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en el mensaje del Poder Ejecutivo que lo acompaña a los cuáles se remiten.

Carlos A. Sueiro.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 1º de noviembre de 1994.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el fin de remitir un proyecto de ley de solidaridad previsional para su tratamiento por el cuerpo, orientado

a resolver los aspectos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que continúan generando un déficit estructural, que, de agravarse, podría poner en peligro la solvencia del régimen de reparto allí previsto.

El proyecto de ley destinado a restablecer la solidaridad de dicho régimen jubilatorio, parte de la dura enseñanza que hemos adquirido, reconociendo plenamente que sólo el equilibrio de las finanzas públicas, obtenido sobre la base de la equidad fiscal, genera las condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico sostenido. Y que sólo ese desarrollo permitirá a nuestra comunidad cumplir con sus mayores, estafados por décadas de inflación, déficit fiscal y desmanejo financiero.

Asimismo, aun cuando se resolvieran adecuadamente las causas que continuaron generando un aumento considerable de los gastos del sistema, sería necesario que se apruebe una ampliación del crédito presupuestario respectivo por la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) para poder afrontar la totalidad de los pagos que aún deben realizarse en el ejercicio en curso.

El título I del proyecto que se envía a vuestra consideración consta básicamente de dos partes, en la primera se proyectan reformas a la legislación de fondo en materia jubilatoria y en la segunda, a la legislación procesal de la seguridad social. Por su parte en el título II se plantean las modificaciones relativas al cálculo de gastos y recursos, introduciéndose también modificaciones tendientes a aumentar la eficiencia en la recaudación del impuesto a las ganancias y a profundizar la solidaridad del sistema.

I

El déficit crónico de la seguridad social tiene una larga historia en nuestro país, cuyos tramos más recientes conviene repasar brevemente.

En 1986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de gravedad institucional articulado por el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Seguridad Social) y mandó a devolver el informe circunstanciado en el que se demostraba la insuficiencia patrimonial y financiera del sistema previsional para afrontar las obligaciones respectivas, en la forma en que eran reconocidas por la Justicia.

Efectivamente, en los autos "Rolón Zappa" ("L. L.", tomo 1.986-E, página 150), la Corte resolvió "Que no constituye óbice decisivo la supuesta gravedad institucional invocada con fundamento en las dificultades económico-financieras por las que atraviesan en la actualidad las cajas, a la luz de un informe proveniente de la Secretaría de Estado de Seguridad Social agregado al interponer el recurso, y con el objeto de demostrar que la aplicación del criterio jurisprudencial vigente produciría a corto plazo la quiebra del sistema previsional por la imposibilidad de pago de las liquidaciones respectivas".

No destacado a vuestra excelencia la referencia al "criterio jurisprudencial vigente", por la importancia que tendrá su análisis en los diferentes aspectos del proyecto de ley. Por eso os pido que retengamos ese concepto,

A continuación la Corte señaló: "Que, en efecto, ha afirmado esta Corte desde antiguo —'Fallos', tomo 178, página 355, tomo 234, página 82— que es principio del ordenamiento jurídico vigente en la República que tanto la organización 'social' como 'política' y 'económica' del país reposan en la ley", agregando inmediatamente que "el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces —comprensivo de la determinación de su conformidad en los principios y garantía de la Ley Fundamental— así como en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales y la suplencia de sus lagunas (artículo 16, Código Civil) no incluye, obviamente, la facultad de instituir la ley misma. No es lícito que los magistrados judiciales argentinos procedan con olvido de su carácter de órganos de aplicación del derecho 'vigente' ni que se atribuyan, así sea por invocación de supuestas razones de 'emergencia', o de 'gravedad del interés público comprometido', potestades legislativas de las que carecen".

Indica seguidamente la Corte el límite de su competencia al señalar que "la ponderación del estado actual de emergencia económica en las cajas nacionales de previsión y de la necesidad de instrumentar las medidas que tiendan a conjugarlo con el fin de conservar los recursos financieros para atender el cumplimiento de las obligaciones con los beneficiarios del sistema, es materia ajena a la órbita del Poder Judicial. Dicha materia inserta en el cúmulo de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación, como órgano investido del poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna con el objeto de lograr la coordinación necesaria entre el interés privado y el interés público y hacer realidad la promoción del 'bienestar general' anunciado en el Preámbulo y contenido en la cláusula del artículo 67, inciso 16 de la Constitución Nacional", remitiendo expresamente a continuación a la competencia del Congreso en los siguientes términos: "Tal actividad del Estado como legislador, llamada 'debido proceso sustantivo' o 'poder de policía', ha sido reconocida por esta Corte a partir del caso 'Ercolano, Agustín c/Lanteri de Renshaw, Julieta s/consignación' ('Fallos', tomo 136, página 161), y, especialmente en el ámbito de la previsión social, ha tenido recepción en los precedentes de 'Fallos', tomo 170, página 12; tomo 173, página 5; tomo 179, página 396; tomo 269, página 416 (revista 'La Ley', tomo 9, página 304; tomo 130, página 485)", (volveremos luego sobre estos precedentes citados por la Corte en 1986).

Todo ello, para concluir la Corte diciendo "Que será función exclusiva del Parlamento la determinación de la existencia y gravedad del paulatino deterioro patrimonial denunciado respecto de los organismos que conformen el sistema previsional, así como la adopción de los remedios idóneos para su restablecimiento a fin de cumplir con el deber de asegurar los beneficios a los integrantes tal cual resulta de la directiva contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esta Corte no puede suplir esa decisión política ni la oportunidad de las disposiciones que se dicten para solu-

cionar la crisis aludida, sin perjuicio, claro está, del ejercicio a posteriori del control jurisdiccional destinado a asegurar la fundamental razonabilidad de estos actos y a impedir que por medio de ellos, se frustrén derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del tribunal”.

Dicho en términos más breves y directos, el criterio jurisprudencial vigente según el cual se declaró la inconstitucionalidad de numerosas disposiciones de las leyes aplicables, aumentando los gastos por encima de los recursos previstos por el legislador, puso en imposibilidad de cumplimiento al sistema previsional. Ello originó una “emergencia” de cuyas consecuencias la Corte se desentendió en 1986. Así, los jueces del más alto tribunal de la República se declararon competentes y actuaron como legisladores para reconocer beneficios, en definitiva, para disponer gastos, pero fueron renuentes a asumir ese rol y respetuosos de la división de poderes para atender a la crisis que sus propios actos provocaron: allí recordaron el rol primordial del legislador en la materia, según la doctrina tradicional.

Pues bien el legislador se ocupó del problema. Primero en 1986, el presidente Alfonsín cumplió ese rol por medio de un decreto de necesidad y urgencia (decreto 2.196 del 28 de noviembre de 1986).

En esa oportunidad el Poder Ejecutivo señaló con claridad “Que el sistema nacional de jubilaciones opera desde hace muchos años en régimen de reparto puro, lo que significa que todas las sumas que se recaudan en un período determinado se aplican íntegramente al pago de las prestaciones correspondientes al mismo período, sin que exista posibilidad alguna de ampliar el gasto más allá de los recursos económicos realmente disponibles”.

Explicó los motivos del desequilibrio del sistema, y señaló que la justicia, a través de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “había declarado la inconstitucionalidad de los criterios administrativos con que se venían aplicando, en relación con los casos concretos, llevados a decisión judicial, diversas normas de la ley 18.037, particularmente las que se refieren a la determinación del haber jubilatorio, el tope máximo de las prestaciones y la movilidad de estas últimas; resultando, por lo tanto, que el sistema legal vigente, cuya interpretación debe integrarse necesariamente con la doctrina judicial, que lo interpreta en definitiva, no puede ser efectivamente cumplido en el marco de las circunstancias económicas reales”. Advirtiendo respecto al hecho “Que la liquidación de los primeros juicios de reajuste con sentencia firme, puso en evidencia la imposibilidad de que el sistema nacional de previsión atendiese tales erogaciones con los recursos presupuestados, dado que éstos se destinan íntegramente a abonar los beneficios corrientes”.

Como consecuencia de todo ello, respaldado en numerosos antecedentes, el doctor Alfonsín declaró la emergencia económica del sistema nacional de previsión social, paralizando la totalidad de los juicios, cualquiera fuere el estado procesal de los mismos; también suspendió la iniciación de nuevos juicios, y dispuso una serie de reformas transitorias a las normas vigentes en

la materia, reconociendo créditos en favor de los beneficiarios con un criterio progresivo, cuyo pago se adería en el tiempo.

Al año siguiente el mismo presidente Alfonsín por decreto de otro decreto de necesidad y urgencia bajo el 687, suspendió la ejecución de sentencias en contra sistema de seguridad social, y propuso un plan de pago a sus beneficiarios.

En 1988, la ley 23.568 que dejó sin efectos los mencionados decretos de necesidad y urgencia en su artículo 1º, contempló, sin embargo, en el resto de su artículo soluciones análogas a las resueltas por el Poder Ejecutivo. Dispuso una moratoria de tres años para el pago de las sentencias. Mantuvo el tope máximo previsto el artículo 55 de la ley 18.037, precisando su alcance pese a que la Corte había declarado su inconstitucionalidad en fallos anteriores, e introdujo una serie de reformas para liquidar los aportes y determinar los haberes de las prestaciones.

Luego en 1989, el legislador declaró la emergencia económica de toda la economía nacional, respetando embargo las soluciones de emergencia ya dadas por el sistema jubilatorio. Pero ello no fue suficiente para sanear el sistema. En 1991, el Poder Ejecutivo recurrió nuevamente a tres decretos de necesidad y urgencia para suspender el trámite de ejecución de créditos contra el Estado que no habían sido alcanzados por la suspensión dispuesta por la ley de emergencia económica, ni cumplidos en los términos previstos por la ley 23.568. Esos decretos fueron luego convalidados por el Congreso de la Nación en el artículo 16 de la ley de consolidación de pasivos del sector público 23.982.

El 1º de abril de 1991 entró en vigencia la Ley de Convertibilidad, que sin duda cambió el curso de acontecimientos económicos de la República en un año y un después. Por primera vez en muchas décadas, las reservas internacionales respaldaron la moneda con la que se pagan los salarios y las jubilaciones.

En esa oportunidad el legislador, con gran sentido de la responsabilidad, en aras de sentar las bases de un sistema monetario enteramente nuevo y definitivo, abolió toda forma de indexación pasada o futura de la economía nacional. En lo sucesivo, ninguna prestación podría ser establecida en moneda nacional, si no lo era en términos nominales.

La derogación dispuesta por su artículo 10 de todas las normas legales o reglamentarias que establecían indexación, actualización monetaria o repotenciación deudas, incluyó, obviamente, las previsiones contenidas en el artículo 53 de la ley 18.037 de jubilaciones, y demás normas análogas.

Vale la pena recordar que en la reforma constitucional introducida en 1957, se confió a la ley el establecimiento de jubilaciones y pensiones móviles, precisamente para paliar los efectos del flagelo inflacionario que había erosionado los beneficios respectivos, liquidándolos en algunos casos prácticamente a su desaparición.

Néstor Pedro Sagiés nos recuerda que “si bien la mayor parte de los convencionales de 1957 consideraban que el régimen jubilatorio era una parte del seguro social obligatorio, mientras éste no fuere instrumentado

se imponía garantizar a jubilados y pensionados un mecanismo de movilidad en sus ingresos (Giordano Yrigoyen, Jarreguilberry), en función del costo de vida (convencional Arigós), precisamente para atender al problema inflacionario" (*Elementos de derecho constitucional*, página 299). Igualmente Biktart Campos indica que "La norma constitucional que así lo estipula —se refiere a la movilidad— es producto de una época que, iniciada ya antes de 1957, acusa a causa de la inflación una constante pérdida del valor adquisitivo de la moneda y un deterioro del signo monetario en su valor real", agregando que "Mientras hubo estabilidad monetaria, el monto de los beneficios acordados no sufría alteraciones en su capacidad adquisitiva, pero no bien el costo de vida fue ascendiendo en forma alarmante, mantener aquel monto significó un congelamiento injusto en los ingresos del sector pasivo, con burla del espíritu y los fines de la seguridad social. Previniendo esta situación, el constituyente ha señalado una pauta muy genérica: las jubilaciones y pensiones han de ser móviles, lo que supone la actualización y el ajuste periódicos de sus montos para adecuarlos al costo de vida" (*Derecho constitucional argentino*, página 434). Y Martínez Vivot confirma que "claro se le agregó la expresión 'móviles' asegurándolas así contra un flagelo que ya se manifestaba entonces en forma incipiente, como es la inflación" (*Derecho de la seguridad social*, página 657).

Queda claro, pues, que el constituyente no incluyó la movilidad de las jubilaciones como una relación proporcional entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes de las prestaciones de los pasivos, sino como un criterio de mantenimiento de los beneficios respecto de la inflación que erosionaba su valor. El criterio de movilidad como una relación entre los trabajadores activos y los pasivos fue una creación legal, limitada por topes máximos y haberes mínimos, que puede ser cambiado por la ley.

Por su parte, la expresión "móviles" que el artículo 14 bis de la Constitución refiere a las jubilaciones y pensiones, no importa necesariamente el establecimiento de un "mecanismo" automático de ajuste que compense la evolución del costo de vida o el valor de los salarios, sino sólo la posibilidad de su movimiento en la forma, condiciones y con la periodicidad que la "ley" establezca. Todo ello teniendo en mira los constituyentes el problema inflacionario.

Por lo cual, si el legislador atacó el problema inflacionario a través de un conjunto de medidas y políticas cuyo eje central fue la convertibilidad de la moneda, y su consecuente desindexación, con la misma finalidad del constituyente de salvaguardar el valor del dinero, una interpretación de tales previsiones que encontrara contradicciones entre ambos procedimientos y pusiera en peligro precisamente la sanidad de las finanzas públicas y su corolario natural, que es el mantenimiento del valor de la moneda, sería totalmente contraria al sentido de las cosas y al normal funcionamiento de las instituciones republicanas.

Resulta claro que el legislador cambió el criterio anterior y retomó para sí la facultad de establecer las jubilaciones y pensiones "móviles", que ya no se ajustaban automáticamente (al derogar las normas respecti-

vas) en base a índices o actualizaciones monetarias; pero era completamente consciente de haberlo hecho en nuevo contexto jurídico-económico, que permitiría pagarlas con moneda estable y libremente convertible, lo que ha ocurrido.

En agosto de 1991, por ley también se dispuso la consolidación del pasivo del sector público, incluyendo las deudas con los beneficiarios del sistema de seguridad social. Se reconoció de oficio deuda en 2.758.080 casos por ocho mil ochenta y un millones ochocientos seis mil pesos (\$ 5.081.806.000). Y hasta agosto de 1992 se hizo lo propio respecto de otros 1.433.265 casos por cinco mil doscientos sesenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil pesos (\$ 5.265.268.000).

Por ley 23.966 se afectaron un treinta por ciento (30 %) del total de los recursos en efectivo provenientes de las privatizaciones a la cancelación de deudas con el sector pasivo.

Por ley 24.145 se comprometieron los recursos derivados de la privatización de YPF S.A. a la cancelación de deudas con el sector pasivo, con dichos recursos además de los que ya se habían destinado a ello, se cancelaron obligaciones con los jubilados y pensionados por mil ochocientos millones de pesos en efectivo y se rescataron bonos y créditos de los beneficiarios por dos mil doscientos setenta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos (\$ 2.275.558.000), cancelándose totalmente las deudas con los mayores de 85 años, por ejemplo, y con los beneficiarios con créditos de hasta mil quinientos sesenta pesos (\$ 1.560).

En octubre de 1993, por medio de la ley 24.241, se introdujo una profunda reforma al sistema jubilatorio, creando un sistema integrado de jubilaciones y pensiones, con dos regímenes, uno de reparto y otro de capitalización, a elección de los trabajadores que resuelve el problema jubilatorio de los actuales trabajadores activos, otorgándoles la posibilidad de ser dueños de sus aportes, en tanto que deroga los regímenes vigentes hasta su entrada en vigencia.

Quiere decir, vuestra excelencia, que el legislador ocupó el rol que le reclamaba la Corte en 1986. Sin embargo, siguieron declarándose inconstitucionales normas que siendo idóneas para lograr "la coordinación necesaria entre el interés privado y el interés público, y hacer realidad la promoción del 'bienestar general' anunciado en el preámbulo" (*sic*), no fueron del agrado de los jueces.

Sin embargo, en uno de los precedentes citados por la Corte en 1986, ésta había establecido que: "El Estado es un administrador o patrono de la Caja de Jubilaciones; no es su dueño ni garante. En casos críticos él puede y debe beneficiarla con nuevos aportes o subsidios, si los recursos del Tesoro lo permiten, como plausible, mas no puede ser compelido por los jueces a hacerlo, sencillamente porque no es ilimitada ni directa la responsabilidad que contrajo al fundar la Institución". Coligiendo: "De ahí se desprende que, cuando las finanzas de la institución llegan a fallar por el transcurso de los años hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base resultaron errados, ya porque intervinieron otros facto-

res de perturbación no previstos, una reforma general y reconstructiva impuesta por la necesidad de volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los beneficios, actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, haciendo así efectivo el principio de solidaridad en que descansan estas instituciones, no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo justifica el interés público y la impone la conservación misma del patrimonio común de los afiliados" ("La Ley", tomo 9, página 304). La Corte de entonces encontró válida tal solución "aun en el derecho francés, donde la obligación del Estado es directa, según se ha visto, Jòze, tan citado por la parte recurrente, admite que el régimen jurídico de las jubilaciones pueda ser modificado en cualquier momento por una ley, sin excluir las jubilaciones ya concedidas y sin que para ello obste el principio de la irrevocabilidad (*Derecho administrativo*, páginas 830 y 831)", por lo que tampoco cabrían objeciones hoy en día en nuestro derecho, luego de la evolución ocurrida en materia de responsabilidad del Estado.

Por supuesto que ninguna "reforma general y reconstructiva" sería posible si los haberes de las prestaciones se determinaran conforme al "criterio jurisprudencial vigente", por cuanto ese criterio carece de cálculo actuarial alguno y resulta imposible de afrontar, no sólo con los recursos propios de la seguridad social —aportes personales y contribuciones patronales— sino aun con la totalidad de los demás recursos públicos que se le han asignado al sistema previsional.

Evidentemente si el "criterio jurisprudencial vigente" consiste en que "la jubilación constituye la prolongación, después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él ha prestado" (causa B-490 XVI, del 13-9-74 y otras), y "en consecuencia, el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad" ("Fallos" 263:400; 265:256; 267:196; 279:389; entre numerosos precedentes), y no se reconoce la validez de los topes establecidos por el legislador para dar sentido redistributivo al sistema, lo que ocurre inevitablemente es que los haberes de quienes perciben menores beneficios se tornan escandalosamente bajos, frente al privilegio de unos pocos.

Y si ese "criterio jurisprudencial vigente", se profundiza como ha ocurrido recientemente, para establecer que: "Si el sistema de reajuste de haberes propiciado en la sentencia de Cámara —que se aparta del establecido por la ley vigente al cese de servicios— altera en la práctica el nivel de vida alcanzado por el afiliado durante su actividad laboral corresponde sea descalificado con base en la doctrina de arbitrariedad" ("Fallos" 311:515), evidentemente la sociedad que debe soportar tal "débito", será incapaz de tolerarlo.

O bien los impuestos que debería afrontar la sociedad para absorber esa carga serían confiscatorios, o lo que resultaría peor, la ley se vería obligada a establecer nuevamente el curso forzoso de una moneda no

convertible, pagando jurídicamente con papel moneda lo que no puede pagarse realmente con dinero, poniendo nuevamente el peso de la carga en los humildes y desprotegidos que no tienen forma de cubrirse de los efectos de la inflación resultante. Y burlando de ese modo los deseos de los constituyentes del 53, del 57 y del 94, que incluyeron entre las facultades del Congreso las de "fijar el valor de la moneda" (artículo 75, inciso 11), "establecer jubilaciones y pensiones móviles" (artículo 14 bis), y proveer lo necesario para la "defensa del valor de la moneda" (artículo 75, inciso 19).

Pero evidentemente el abandono de toda relación con los haberes de los activos y la abolición de toda indexación de las jubilaciones y pensiones por la evolución de los precios o salarios, con el consecuente restablecimiento del sano criterio que —como dice la Constitución—, sea la ley la que "establezca" en cada caso y año por año la "movilidad" en función de los recursos que se voten para ello, requiere de una verdadera conducta republicana en los funcionarios de los tres poderes del gobierno federal, que haga desaparecer también ese criterio equivocado de movilidad, de las jubilaciones que a ellos les correspondan.

Por eso, vuestra excelencia, se propone en el proyecto de ley una ratificación de la derogación dispuesta ya por el Poder Ejecutivo en virtud de la ley 24.241 de la totalidad de las llamadas con razón "jubilaciones de privilegio", para evitar dudas interpretativas sobre su efectiva derogación ya ocurrida.

En este último aspecto vale la pena recordar que en 1937 la Corte no dudó un instante en salvaguardar el interés público comprometido en la subsistencia del sistema jubilatorio, pese a que los recurrentes eran "trece ex magistrados de la justicia ordinaria de Tucumán", como nos recuerda el procurador general don Juan Alvarez en su dictamen (ver "López, Tiburcio y otros contra Provincia de Tucumán", antes citado).

Pues bien, vuestra excelencia, a todas las reformas ya aprobadas por las leyes comentadas agregamos el proyecto de ley adjunto, con el que se integran la "reforma general y reconstructiva" a la que alude la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de dicho proyecto, se deroga definitivamente toda relación entre el salario del trabajador en actividad y los haberes de las prestaciones de los jubilados y pensionados. Como dice la Constitución, "la ley establecerá las jubilaciones y pensiones móviles".

Al respecto la Corte ha dicho que: "No está de más recordar, que es muy cierto que la Constitución Nacional no preconiza un único sistema de movilidad, confiando su elección a la prudencia legislativa" ("Fallos" 295:694; 269:174).

En esa inteligencia, anualmente, conforme al cálculo de recursos del presupuesto del Régimen de Reparto, se establecerá por ley la movilidad que habrá de asignarse a las jubilaciones, lo que en el contexto de estabilidad general de la moneda es perfectamente compatible con todos los principios constitucionales en la materia. Por otra parte, que tal decisión repose en última instancia

en los representantes del pueblo —del que los jubilados son una parte sustancial— constituye una sana solución al problema, ya que se cumplirá lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional con la participación decisoria de los representantes de quienes recibirán el beneficio y de quienes deberán soportar la carga correspondiente, en función de lo que sea económica y financieramente posible.

Se reitera, por su parte, la vigencia plena de la Ley de Convertibilidad que derogó toda norma indexatoria, incluida la prevista en el artículo 53 de la ley 18.037 y concordantes, a partir del 1º de abril de 1991.

Una vez más se ratifican los importes mínimos de los haberes y sus topes máximos, por encima de los cuales no se pagará beneficio alguno. Con su respeto se restablecerá la solidaridad en un sistema que tiene por fin primordial atender a la seguridad social, como lo marca la propia Constitución. Actualmente el 3 % del total de beneficiarios obtienen el 15 % del total de los recursos y un 85 % de ellos reciben sólo el 60 % de los recursos, lo que está mostrando la injusticia del sistema jubilatorio resultante de la deformación que introdujeron las sentencias que declararon reiteradamente la inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley 18.037. En tal sentido el proyecto receptar lo adecuado para un régimen de reparto, en el que no puede pretenderse asegurar una prestación mínima, si a la vez no se logra la vigencia efectiva de un tope máximo. Si ello no se previera, o previsto no pudiere hacerse efectivo, el régimen mostraría —como muestra— un desequilibrio imposible de sobrellevar.

Se han proyectado importantes reformas al procedimiento de revisión judicial de los actos por los que se otorguen o denieguen beneficios o reajustes sobre los mismos.

Se transfiere la Cámara Nacional de la Seguridad Social al fuero federal, estableciendo un procedimiento acorde con el derecho de defensa en juicio que el Estado debe tener en las causas a las que sea sometido. A tal fin se completa el procedimiento con un recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con independencia del monto individual del caso, dada la indudable multiplicación de efectos económicos que tiene cualquier precedente para un sistema con millones de beneficiarios.

Congruente con el criterio de reparto adoptado, se introduce como defensa de fondo a ser articulada por la Administración Nacional de la Seguridad Social la de falta de recursos para atender el criterio jurisprudencial que pueda resultar del fallo. En este sentido se siguen los dictados de la realidad que ya habían tenido recepción jurisprudencial al nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señaló que “Los jueces, al decidir cuestiones de prestaciones jubilatorias, deben ponderar las posibilidades financieras de los entes previsionales (“Fallos” 305:2.083 y 2.119; 306:1.155)” resaltando que “dicho pedido de cautela tendía a que tales organismos puedan preservar los recursos para atender el cumplimiento de las prestaciones acordadas a todos los afiliados” (“Fallos” 312:1.715).

En cuanto a las sentencias que se dicten contra el Estado en un procedimiento que será con costas por su or-

den, deberán adecuarse a la naturaleza de la institución a la que se refieren. Por lo que se declara la inembargabilidad de los recursos del Régimen de Reparto y la limitación de la responsabilidad del Estado. Por tal motivo, las sentencias deberán cumplirse cronológicamente con los recursos que en cada presupuesto anual asigne el legislador.

Se establece un plazo cierto a partir del cual comenzarán a cumplirse las sentencias dictadas o a dictarse hasta el 1º de enero de 1996, generando durante todo este tiempo los recursos genuinos para atenderlas, sin resentir el cumplimiento de las obligaciones previsionales con los demás beneficiarios.

Finalmente se establece la aplicación de la reforma a las jubilaciones otorgadas y a otorgarse, teniendo en cuenta “Que una reforma general y reconstructiva de las finanzas de la caja no puede reducirse a rebajar los emolumentos a acordar, dejando incólume los acordados ya, sin romper la equidad y armonía que debe existir en la distribución de los beneficios entre los afiliados a una misma caja, además de que se restaría eficacia a la reforma. Tan acreedores al beneficio son los primeros afiliados como los que les suceden, y si para salvar la solvencia de la caja se rebajan los emolumentos de unos, deben imponerse igual o proporcional sacrificio a los otros”, señaló la Corte en el precedente antes citado (*in re* “López, Tiburcio”), recordando que “las leyes de previsión social, por sus fines, por los propósitos que las inspiran, por las obligaciones que traen aparejadas, y por sus beneficios, reúnen todos los requisitos necesarios para clasificarlas como leyes de orden público (artículo 5º del Código Civil; “Fallos”, tomo 13, página 5)”, pero adaptando la cuestión a la legislación actualmente vigente en la materia según la cual las leyes nuevas se aplican “aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, pudiendo disponerse incluso, lo que no se hace, que pueden tener efectos retroactivos (artículo 3º, Código Civil, luego de su reforma).

La reducción de haberes sólo se producirá respecto de aquellas prestaciones que superen el tope previsto en el proyecto de ley y por los períodos posteriores a su entrada en vigencia. Al respecto la jurisprudencia más reciente ha establecido que “La ley puede reducir lícitamente el beneficio jubilatorio en cuanto a su monto —en la medida que intereses superiores lo requieran— pero únicamente para el futuro y sólo en tanto la resolución no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada” (“Fallos” 173:5; 235:783).

Asimismo ha resuelto “Que, en tal sentido, también ha establecido la Corte que no existen derechos adquiridos en cuanto al contenido económico de los beneficios previsionales (“Fallos” 170:12, 179:394; 234:717; 235:783; 258:14), por lo que pueden ser disminuidos siempre que la reducción que se realice no importe desconocer, suprimir o alterar los derechos acordados, sino sólo rebajar para el futuro el monto del haber” (“Fallos” 190:248; 258:14; 269:174), aunque es obvio, “Únicamente y siempre que medien razones de orden público o interés general debidamente acreditadas, puede alterarse el monto de la prestación pero sólo para el futuro” (*in re* “Gay, Enriqueta Isabel c/Estado nacional”, fallo del 30 de marzo de 1993).

II

En el título II, capítulo II del proyecto de ley que se somete a la consideración de vuestra excelencia, en mérito a razones de equidad social y solidaridad que deben regir las estructuras de los sistemas tributarios, máxime cuando su producido se afecta a financiar el Régimen de Reparto de las jubilaciones y pensiones, se considera procedente introducir ciertas modificaciones al régimen de exenciones del citado impuesto a las ganancias, para lo que se ha tenido en cuenta el logro de un tratamiento igualitario de todos los ciudadanos frente al tributo, así como también la eliminación de beneficios según la naturaleza jurídica del sujeto, que alteran los niveles de competencia del mercado, sin descuidar el necesario impulso que debe brindarse a las actividades destinadas a la prestación de servicios indispensables para la población.

III

En el capítulo III del título II del proyecto de ley adjunto, se complementan las disposiciones de la ley 24.241, respecto del régimen dispuesto para las personas incluidas en el apartado 4, del inciso b), de su artículo 3º, que permite a quienes se encuentren obligatoriamente afiliados a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, adherirse voluntariamente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

En tal sentido, por razones de equidad y en atención al principio de solidaridad social que rige en la materia, se considera justificado exigir, en aquellos casos en que no se verifique la referida adhesión al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), el ingreso de aportes que tengan por destino el Régimen Previsional Público, instituido por el artículo 1º de la norma legal citada precedentemente y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) regido por la ley 19.032 y sus modificaciones. Como contrapartida de la obligación de aportar al Régimen Previsional Público que se propicia, es dable acordar a los trabajadores involucrados el derecho a la prestación establecida en el inciso a), del artículo 17, de la ley 24.241, contemplando las particulares modalidades del régimen que se proyecta, y también, como consecuencia de la obligación de aportar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que por la presente se propicia, es menester determinar que estos trabajadores sean considerados beneficiarios del mismo, en los términos y condiciones establecidos por la citada ley 19.032 y sus modificaciones.

Por último, corresponde agregar a las leyes 24.241 y 19.032, respectivamente, que los aportes que por el presente proyecto de ley se instituyen, se destinarán, el dieciséis por ciento (16 %) al financiamiento de las prestaciones del régimen de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y el cinco por ciento (5 %) como recursos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

IV

Con todos los fundamentos expuestos el Poder Ejecutivo está convencido que el proyecto se encuadra dentro de la Constitución, y considera que con su aprobación por parte de vuestra excelencia se acabarán los problemas de solvencia y solidaridad del sistema previsional de manera definitiva, lo que significa un aporte imprescindible para completar la labor de saneamiento de las finanzas públicas —condición necesaria del bienestar general— y la reparación histórica hacia nuestros mayores, con los que tanto se ha comprometido el gobierno federal, integrado por sus tres poderes, representando el sentir y el mandato de la sociedad.

El progreso de la Nación depende, en gran medida, de la cabal comprensión por parte de los hombres de Estado de la estrecha relación que existe entre la salud de las finanzas públicas y el desarrollo nacional.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.922

CARLOS S. MENEM.

*Domingo F. Cavallo. — Rodolfo C. Barrá,
— José A. Caro Figueroa.*

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

De las reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

CAPÍTULO I

Reformas a la legislación previsional

Artículo 1º — Modifícase el artículo 16 de la ley 24.241, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 16: El Estado nacional compromete al financiamiento del Régimen de Reparto exclusivamente los recursos previstos por la presente ley, y los fondos adicionales que anualmente le asigne el presupuesto general de la administración nacional. Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros.

Art. 2º — Modifícase el artículo 17 de la ley 24.241, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 17: El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:

- a) Prestación básica universal;
- b) Prestación compensatoria;
- c) Retiro por invalidez;
- d) Pensión por fallecimiento;
- e) Prestación adicional por permanencia.

En ningún caso las prestaciones a cargo del Régimen de Reparto en favor de cada beneficiario podrán ser inferiores a los importes mínimos o su-

perar los importes máximos establecidos en las leyes particulares de aplicación, o que se establezcan anualmente por medio de la ley.

Art. 3º — Modifícase el artículo 32 de la ley 24.241, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 32: Los haberes de las prestaciones correspondientes al Régimen de Reparto tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto para el período fiscal en el que se ejecuta, conforme al cálculo de recursos respectivo. En ningún caso la movilidad jubilatoria consistirá en una determinada proporción entre el haber de retiro y los salarios del personal en actividad.

Art. 4º — La movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgarse por aplicación de las leyes anteriores a la presente ley, se regirá por las siguientes disposiciones:

- a) En el período anterior a la entrada en vigencia de la ley 23.928, se aplicarán las normas entonces vigentes, a cuyo fin, se aprueba como anexo I e integrando la presente ley, el "Índice de variación del nivel general de remuneraciones";
- b) En el período comprendido entre el 1º de abril de 1991 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, sólo tendrán la movilidad que en cada caso haya dispuesto el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Administración Nacional de Seguridad Social;
- c) A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, gozarán de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241.

Asimismo, los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgarse por aplicación de las leyes anteriores a la presente ley, estarán sujetos a los importes mínimos y máximos que se determinen conforme al artículo 17 de la ley 24.241. Los recursos adicionales que se asignen actualmente al Régimen de Reparto se destinarán en mayor medida a los haberes de los beneficiarios que carezcan de otros medios de vida y perciban menos de cuatrocientos cincuenta pesos (\$ 450), hasta que todos los beneficiarios alcancen ese nivel, según lo determine la ley.

Art. 5º — Establécese el máximo de los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la ley 24.241 que no tuvieran otro haber máximo menor, en la suma equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del monto máximo de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones previstas en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 18.037, modificado por el artículo 158, apartado 1 de la ley 24.241. En ningún caso se abonarán haberes previsionales mensuales superiores a los montos máximos establecidos por la ley.

Art. 6º — Convalídase, en lo que fuere competencia del Congreso, y desde su vigencia, el decreto 78 del 19 de enero de 1994, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 49 de la ley 24.347.

Art. 7º — Incorpórase como inciso 6 del artículo 34 de la ley 24.241 modificado por el artículo 1º de la ley 24.347, el siguiente:

6. No será compatible la percepción de haber jubilatorio superior al máximo vigente según las leyes 18.037 y 18.038, con el desempeño de tareas en relación de dependencia o en carácter de autónomo. Si el titular de tales beneficios reingresara a la actividad, se abonará la jubilación mínima vigente. El destino de los aportes será determinado por el inciso 1, del presente artículo. El inciso anterior será de aplicación también a estos casos, considerándose empleador al autónomo.

Art. 8º — Es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualquiera fuere su naturaleza y titular.

Prescribe al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de transformación, reajuste o movilidad que se hubieren devengado.

La presentación de la solicitud ante la autoridad competente suspende por un año el curso de la prescripción, siempre que al momento de formularse el peticionario fuere acreedor al beneficio solicitado.

Art. 9º — La presente ley es de orden público, ningún habitante de la Nación puede alegar la existencia de derechos adquiridos contra ella. La misma se aplicará aun a los efectos pendientes de las situaciones jurídicas existentes, debiendo reducirse cuando corresponda los haberes de las prestaciones ya otorgadas que hubieren sido determinados por acto administrativo firme o sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, respecto a los períodos posteriores a su entrada en vigencia. No se aplicará retroactivamente respecto a haberes correspondientes a períodos anteriores a su entrada en vigencia, que hubieren sido percibidos por los beneficiarios.

Art. 10. — Deróganse los artículos 82 de la ley 18.037 y 125, inciso b), 158, inciso 6) y 160 de la ley 24.241, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

CAPÍTULO II

Reforma al procedimiento judicial de la seguridad social

Art. 11. — El procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de Seguridad Social, se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

Art. 12. — Las resoluciones de la Administración Nacional de Seguridad Social podrán ser impugnadas ante la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 25, inciso a) de la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno, que tramitará por las reglas del proceso sumario

previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas en la presente ley. La Administración Nacional de Seguridad Social actuará como parte demandada. Si el interesado se domicilia en el interior del país, podrá optar por presentar su demanda ante el juez federal de su domicilio, quien remitirá las actuaciones a dicha Cámara.

Art. 13. — La Administración Nacional de Seguridad Social podrá articular como defensa válida la limitación de recursos en el Régimen de Reparto para atender el mayor gasto que se derivaría de un acogimiento de la demanda y su eventual extensión a los casos análogos.

Art. 14. — Sólo se admitirán los medios probatorios documentales, testimoniales, de informes y los que el tribunal dispusiere para mejor proveer salvo que la Administración Nacional de Seguridad Social articule la defensa de limitación de recursos en el Régimen de Reparto, en cuyo caso se admitirá también la prueba pericial correspondiente.

Art. 15. — La sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio cumplimiento por los jueces inferiores en las causas análogas.

Art. 16. — Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiere pronunciado reiteradamente en casos análogos respecto a la aplicación de la presente ley, podrá rechazar *in limine* el recurso interpuesto, sin otra fundamentación.

Art. 17. — Las costas serán por su orden. Los honorarios totales a cargo del beneficiario en ningún caso podrán superar el diez por ciento (10 %) de un (1) año de las diferencias que se le reconocieren a su favor. Son nulos los pactos de cuota litis.

Art. 18. — Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de Seguridad Social serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo. Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su cumplimiento, salvo cuando queden sentencias penales para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento. La Administración Nacional de Seguridad Social deberá respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas para su cumplimiento, salvo cuando queden sentencias pendientes de cumplimiento para el siguiente período fiscal, en cuyo caso dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Serán de aplicación las leyes 23.982 y 24.130; y supletoriamente la ley 3.952.

Art. 19. — En ningún caso los jueces podrán fijar un plazo distinto para el cumplimiento de las sentencias, ni aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas o comminatorias a los organismos respectivos, ni a los funcionarios competentes. Quedan sin efectos las medidas de ese

tipo que se hubieren adoptado o trabado. Los bienes y cuentas de la Administración Nacional de Seguridad Social o del Estado nacional son inembargables, autoridades administrativas competentes deberán evitar de inmediato la interrupción o el levantamiento de las medidas compulsivas, cautelares o ejecutorias puestas con anterioridad a la presente ley, incluye las trabadas respecto a los bienes afectados al servicio de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Art. 20. — Créanse tres (3) salas de tres (3) jueces cada una en la Cámara Federal de la Seguridad Social autorizando al Poder Ejecutivo nacional a disponer ampliaciones presupuestarias que resulten necesarias para su funcionamiento.

Art. 21. — Las normas previstas en el presente título serán de aplicación inmediata a las causas en trámite. Las que estuvieren radicadas ante la Cámara Nacional de Seguridad Social, pendientes de sentencia, serán convertidas al procedimiento previsto en la presente ley, notificando a los recurrentes para que acudan su presentación al nuevo procedimiento, solicitando lo que en derecho corresponda. En estos casos y por única vez, la Administración Nacional de Seguridad Social tendrá un plazo de seis (6) meses para contestar demanda y ofrecer pruebas, contados a partir de su notificación.

Art. 22. — Las sentencias dictadas o que se dicten en esa materia contra la Administración Nacional de Seguridad Social o el Estado nacional hasta el 31 de diciembre de 1995, serán cumplidas recién a partir del 1º de enero de 1996, de acuerdo al procedimiento previsto en la presente ley.

Art. 23. — Deróganse los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 14 de la ley 23.473. La Cámara Nacional de la Seguridad Social creada en dicha ley, con las modificaciones introducidas, se transformará en la Cámara Federal de la Seguridad Social prevista en esta ley a todos sus efectos, con los mismos jueces, funcionarios y empleados actualmente a cargo, con más los que se designen para integrar las nuevas salas.

TÍTULO II

Reforma presupuestaria y financiera

CAPÍTULO I

Modificaciones presupuestarias

Art. 24. — Ampliase en la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) el presupuesto de las instituciones de seguridad social de la Administración Nacional de Seguridad Social, para el ejercicio 1994, con destino a la finalidad servicios sociales y a gastos corrientes, según detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 25. — Ampliase en la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) el importe correspondientes a gastos figurativos por transacciones corrientes de la administración central, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional de Seguridad Social, en la misma suma.

Art. 26. — Como consecuencia de lo establecido en los artículos 24 y 25, ampliase en la suma de un mil doscientos noventa y cinco millones de pesos (\$ 1.295.000.000) la fuente de financiamiento de la administración central, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 27. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer las modificaciones que estima necesarias de los montos aprobados por los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la ley 24.307 y la ampliación dispuesta por el artículo 23 de la presente ley.

Art. 28. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer un incremento hasta el monto previsto en el artículo 23 de la presente ley, en las operaciones de crédito público autorizadas en la planilla N° 10, anexa al artículo 9º de la ley 24.307, correspondientes a la deuda instrumentada de la administración central y a efectuar las reestructuraciones en dicha planilla que considere necesarias para su adecuación a las condiciones imperantes en los mercados.

Art. 29. — La Administración Nacional de Seguridad Social deberá destinar una parte de su superávit financiero anual para atender las contingencias judiciales una vez vencido el plazo de suspensión dispuesto en esta ley, sin afectar el financiamiento de las prestaciones ordinarias.

CAPÍTULO II

Impuesto a las ganancias

Art. 30. — Modifícase la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones de la siguiente forma:

1. Sustitúyense los incisos d) y g) del artículo 21 por los siguientes:

d) Las utilidades de las cooperativas derivadas de la producción y comercialización de productos primarios, las correspondientes a las cooperativas de trabajo y de consumo y las obtenidas durante los cinco (5) primeros ejercicios fiscales a partir de su constitución, por las cooperativas que presten servicios de telecomunicaciones rurales o provisión de gas, electricidad, agua corriente y servicios locales y de desagüe.

Asimismo, estará exento el retorno o interés accionario que las cooperativas de consumo y las no comprendidas en la exención dispuesta en el párrafo anterior, distribuyan entre sus socios;

g) Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarios permanentes y los beneficios deriven de actividades similares a las realizadas por las entidades regidas por la ley 21.526.

2. Elimínense los incisos p), q) y r) del artículo 20.

Las disposiciones contenidas en los puntos 1 y 2 precedentes entrarán en vigencia el día de su publicación y surtirán efecto desde el 1º de enero de 1995 o, en su caso, para los ejercicios que cierren a partir de dicha fecha, inclusive.

Art. 31. — Modifícase el artículo 33 de la ley 24.073, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 33: Los créditos fiscales a que se refiere el presente título se considerarán deudas del Estado nacional al 31 de marzo de 1991, una vez conformado su importe por la Dirección General Impositiva, a partir del ejercicio fiscal en el que hubiera correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio.

Tales deudas serán abonadas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación en moneda nacional a dieciséis (16) años, creados por la ley 23.982, siendo de aplicación dicha norma legal y su reglamentación en cuanto no se oponga a lo previsto en este título.

Vencido el plazo que establezca la Dirección y que no será menor de ciento ochenta (180) días, los créditos se considerarán de oficio como contravertidos y los reclamos correspondientes, se deberán realizar según los procedimientos de la mencionada ley 23.982.

Art. 32. — Sustitúyese el inciso a) del punto 1 del artículo 4º del decreto 879 del 3 de junio de 1992, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307, con efectos retroactivos al 1º de julio de 1994, por el siguiente texto:

a) El veinte por ciento (20 %) al Sistema de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, déjase sin efecto el inciso b) del artículo 1º del decreto 1.985 de fecha 26 de octubre de 1992.

CAPÍTULO III

Extensión de la solidaridad previsional

Art. 33. — Las personas comprendidas en el apartado 4 del inciso b) del artículo 3º de la ley 24.241, que no adhirieran voluntariamente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), estarán obligadas a ingresar al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), el dieciséis por ciento (16 %) sobre la renta imponible mensual propia de la categoría que por idéntica actividad le hubiera correspondido, de conformidad a lo establecido en el artículo 8º de la precitada ley, con destino al Régimen Previsional Público instituido por el artículo 1º de dicha norma, y el cinco por ciento (5 %) sobre la misma renta imponible, con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilación.

dos y Pensionados (INSSJP) regido por la ley 19.032 y sus modificaciones.

Art. 34. — Las personas aludidas en el artículo 1º del presente, que como consecuencia del ejercicio de su profesión obtengan ingresos brutos anuales inferiores al equivalente a veinticuatro (24) veces el valor del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), podrán mediante la presentación de una declaración jurada, solicitar la imputación del crédito proveniente de los aportes ingresados aplicándolo al ejercicio siguiente.

No serán considerados a ninguno de los efectos establecidos en esta ley en materia de prestaciones, los períodos sobre los que de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo precedente, no corresponda ingresar aportes y respecto de los cuales se solicite su imputación a un ejercicio futuro.

Facúltase a la Dirección General Impositiva a dictar las normas complementarias que considere necesarias a los fines dispuestos en el presente artículo.

Art. 35. — Los sujetos indicados en el artículo 1º de la presente, tendrán derecho a la prestación instituida en el inciso a) del artículo 17 de la ley 24.241, de acuerdo con las siguientes modalidades:

a) Para obtener la prestación básica universal (PBU) deberán estar en condiciones de acceder a un beneficio previsional, por las contingencias de vejez o invalidez, en cualquiera de los regímenes indicados en el apartado 4 del inciso b), del artículo 3º de la ley 24.241, o en alguno de los regímenes de reciprocidad previstos en el decreto ley 9.316/46, ratificado por la ley 12.921 y en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 363/81, y acreditar tantos años de servicios con aportes adicionales del dieciséis por ciento (16 %), como los requeridos en el inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241, aplicándose la escala del artículo 38 de la misma ley;

b) De no alcanzar el mínimo de años de servicios con aportes referidos en el párrafo anterior, al tiempo de acceder a un beneficio previsional en alguno de los regímenes aludidos precedentemente, se harán acreedores a la parte proporcional de la Prestación Básica Universal (PBU) que le corresponda, la que se obtendrá dividiendo el valor de la misma por la cantidad de meses de servicio con aportes exigidos según lo indicado en el punto anterior y multiplicando el resultado por la cantidad de meses respecto de los cuales se aportó el dieciséis por ciento (16 %) adicional. Será requisito ineludible haber ingresado cuando menos doce (12) posiciones mensuales;

c) En el supuesto de muerte del obligado en actividad, o del beneficiario, los derechohabientes indicados en el artículo 53 de la ley 24.241 gozarán de una pensión consistente en la aplicación de los porcentajes previstos en el artículo 98 de la misma ley, sobre la Prestación Básica Universal (PBU) o su parte proporcional, a la

que fuese acreedor el obligado, o la que gozará el beneficiario, al mes en que ocurriera su fallecimiento.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo nacional adecuará los porcentajes indicados en los artículos anteriores de acuerdo a las variaciones que se dispongan respecto de los aportes establecidos en el segundo párrafo del artículo 11 de la ley 24.241 y en el inciso c) del artículo 8º de la ley 19.032 y sus modificaciones.

Art. 37. — Los trabajadores indicados en el artículo 1º de la presente, serán considerados beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en los términos y condiciones establecidos por la ley 19.032 y sus modificaciones.

Art. 38. — Agrégase como inciso i), al artículo 18 de la ley 24.241, modificada por su similar 24.347, el siguiente:

i) El aporte del dieciséis por ciento (16 %) previsto en el artículo 33 de la Ley de Solidaridad Previsional.

Art. 39. — Agrégase como inciso j) del artículo 8º de la ley 19.032 y sus modificaciones, el siguiente:

j) El aporte del cinco por ciento (5 %) previsto en el artículo 33 de la Ley de Solidaridad Previsional.

Art. 40. — Los sujetos indicados en el artículo 33 de la presente ley no podrán computar como pago a cuenta, en los términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, los aportes que en virtud de la obligación instituida por la presente ley efectúen al Sistema Unico de Seguridad Social.

Art. 41. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — José A. Caro Figueroa. — Rodolfo G. Barra.

ANEXO I

INDICE GENERAL DE REMUNERACIONES

1970

Enero	100,00
Febrero	100,00
Marzo	107,00
Abril	107,00
Mayo	107,00
Junio	107,00
Julio	107,00
Agosto	107,00
Septiembre	114,00
Octubre	114,00
Noviembre	115,15
Diciembre	115,15

1971

Enero	125,57
Febrero	125,57
Marzo	125,57
Abril	154,18
Mayo	154,18
Junio	154,18
Julio	154,18
Agosto	154,18
Septiembre	160,02
Octubre	160,02
Noviembre	160,02
Diciembre	160,02

1972

Enero	184,02
Febrero	184,02
Marzo	184,02
Abril	184,02
Mayo	211,63
Junio	211,63
Julio	211,63
Agosto	211,63
Septiembre	211,63
Octubre	234,42
Noviembre	234,42
Diciembre	234,42

1973

Enero	319,94
Febrero	319,94
Marzo	328,71
Abril	326,85
Mayo	333,44
Junio	393,57
Julio	394,23
Agosto	394,23
Septiembre	394,45
Octubre	394,51
Noviembre	394,51
Diciembre	394,51

1974

Enero	394,51
Febrero	398,44
Marzo	408,93
Abril	480,96
Mayo	489,62
Junio	494,54
Julio	500,94
Agosto	510,86
Septiembre	517,23
Octubre	522,44
Noviembre	610,57
Diciembre	634,94

1975

Enero	648,74
Febrero	649,93

Marzo	745,84
Abril	788,76
Mayo	827,01
Junio	1.680,18
Julio	1.672,51
Agosto	1.921,55
Septiembre	1.971,69
Octubre	2.009,31
Noviembre	2.328,68
Diciembre	2.312,49

1976

Enero	3.199,04
Febrero	3.318,63
Marzo	4.082,15
Abril	4.392,67
Mayo	4.451,03
Junio	5.017,31
Julio	5.057,05
Agosto	5.145,72
Septiembre	5.793,28
Octubre	5.793,28
Noviembre	6.585,80
Diciembre	6.585,70

1977

Enero	7.035,25
Febrero	7.035,25
Marzo	8.438,90
Abril	9.396,97
Mayo	9.692,75
Junio	9.776,47
Julio	1.381,98
Agosto	2.234,24
Septiembre	2.859,36
Octubre	14.066,04
Noviembre	14.857,53
Diciembre	15.560,42

1978

Enero	20.665,28
Febrero	21.529,23
Marzo	21.946,54
Abril	23.534,84
Mayo	28.588,06
Junio	29.234,79
Julio	30.545,86
Agosto	34.254,93
Septiembre	38.569,57
Octubre	40.897,09
Noviembre	43.350,83
Diciembre	53.821,90

1979

Enero	57.105,16
Febrero	58.580,84
Marzo	60.974,43
Abril	66.007,10

Marzo	77.521,62
Junio	82.881,67
Julio	89.515,54
Agosto	95.824,10
Septiembre	108.776,93
Octubre	121.634,82
Noviembre	127.662,71
Diciembre	133.129,63

1980

Enero	156.468,35
Febrero	160.962,11
Marzo	165.791,39
Abril	172.388,71
Mayo	189.744,81
Junio	194.733,44
Julio	207.818,03
Agosto	220.630,86
Septiembre	234.950,39
Octubre	245.385,97
Noviembre e.....	252.212,14
Diciembre	261.037,54

1981

Enero	287.682,89
Febrero	294.111,72
Marzo	302.723,80
Abril	313.463,84
Mayo	331.320,99
Junio	358.259,57
Julio	390.777,47
Agosto	409.062,11
Septiembre	439.639,63
Octubre	492.010,50
Noviembre	594.593,85
Diciembre	517.565,82

1982

Enero	579.063,60
Febrero	591.990,75
Marzo	634.765,16
Abril	617.241,66
Mayo	631.202,06
Junio	662.426,83
Julio	775.864,29
Agosto	814.375,72
Septiembre	1.103.902,30
Octubre	1.350.404,42
Noviembre	1.509.522,82
Diciembre	1.685.630,97

1983

Enero	1.935.920,80
Febrero	2.131.357,80
Marzo	2.537.070,26
Abril	2.692.635,71
Mayo	3.123.093,52
Junio	3.643.135,64

Julio	4.336.733,52
Agosto	4.957.185,04
Septiembre	6.187.450,86
Octubre	7.449.588,85
Noviembre	8.856.214,01
Diciembre	10.981.025,43

1984

Enero	13.284.321,01
Febrero	15.003.293,45
Marzo	18.402.991,73
Abril	22.427.384,56
Mayo	25.368.123,57
Junio	29.862.099,73
Julio	35.909.313,04
Agosto	45.154.387,54
Septiembre	53.290.270,48
Octubre	69.279.476,44
Noviembre	76.975.543,42
Diciembre	80.075.643,29

1985

Enero	117.631.685,18
Febrero	136.155.791,17
Marzo	167.809.106,94
Abril	213.116.460,91
Mayo	277.164.651,63
Junio	333.595.393,40
Julio	342.094.639,10
Agosto	346.344.261,94
Septiembre	346.344.261,94
Octubre	350.593.884,79
Noviembre	352.718.696,21
Diciembre	354.843.507,64

1986

Enero	393.090.113,25
Febrero	393.214.924,67
Marzo	403.714.170,36
Abril	410.088.604,63
Mayo	452.584.833,09
Junio	465.333.701,63
Julio	516.329.175,78
Agosto	548.201.347,13
Septiembre	584.323.141,32
Octubre	633.193.804,04
Noviembre	636.359.773,06
Diciembre	639.541.571,93

1987

Enero	720.311.072,39
Febrero	733.059.940,93
Marzo	762.807.300,85
Abril	790.429.849,35
Mayo	822.302.020,69
Junio	939.166.648,95
Julio	1.002.910.991,64
Agosto	1.102.777.128,52
Septiembre	1.249.389.116,71

Octubre	1.434.296.705,98
Noviembre	1.434.298.705,98
Diciembre	1.434.298.705,98

1988

Enero	1.980.324.246,22
Febrero	2.143.934.725,79
Marzo	2.445.657.947,85
Abril	2.840.872.872,53
Mayo	3.278.584.025,66
Junio	3.867.156.789,83
Julio	4.623.589.656,41
Agosto	5.896.351.698,79
Septiembre	6.565.667.297,03
Octubre	7.254.106.198,07
Noviembre	7.616.811.507,97
Diciembre	7.921.483.968,28

1989

Enero	10.094.979.070,61
Febrero	11.015.022.416,76
Marzo	12.321.781.441,90
Abril	16.163.440.494,66
Mayo	26.040.918.981,01
Junio	53.090.538.214,73
Julio	144.227.949.769,46
Agosto	181.295.285.043,45
Septiembre	206.604.106.835,52
Octubre	247.924.928.202,62
Noviembre	247.924.928.202,62
Diciembre	280.155.168.868,96

1990

Enero	608.624.609.565,90
Febrero	960.508.254.892,38
Marzo	1.698.943.968.722,78
Abril	2.258.136.965.344,33
Mayo	2.640.751.758.281,45
Junio	3.027.705.416.144,32
Julio	3.281.333.531.649,07
Agosto	3.762.288.846.864,84
Septiembre	4.264.768.501.795,47
Octubre	4.752.803.688.672,63
Noviembre	4.990.443.873.106,26
Diciembre	5.239.966.066.761,58

1991

Enero	5.532.545.736.565,88
-------------	----------------------

Planilla anexa al artículo 24

Instituciones de Seguridad Social
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Administración Nacional de Seguridad Social

Créditos por incisos
(en pesos)

Transferencias	1.295.000.000
----------------------	---------------

Planilla anexa al artículo 26

Administración Central

Fuentes financieras
(en pesos)

Jurisdicción: Económica, endeudamiento público e incremento de otros pasivos

Deuda pública 1.295.000.000

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: seré muy breve en mi exposición. Confieso que estamos frente a uno de los temas más difíciles que me ha tocado informar.

El proyecto original tenía más de cuarenta artículos sobre una materia muy especializada, y después de dos meses de trabajo, arduo esfuerzo en las comisiones y múltiples reuniones logramos acordar el tratamiento de un dictamen que recién fue aprobado esta mañana.

Todos tuvimos que ceder en algo, como ocurre siempre que se trata un proyecto de esta naturaleza. Los justicialistas hubiésemos pretendido incorporar algunos artículos, pero finalmente tuvimos que acceder a que ello no suceda, e incluso tuvieron que eliminarse otros artículos.

No renunciamos a la oportunidad política de insistir en los temas que estamos convencidos que deben figurar en una norma de esta naturaleza. Tenemos que tener un sistema previsional que sea permanente, previsible, y que siempre tenga financiamiento para que el jubilado no quede sujeto a la incertidumbre; para que no se corra el riesgo de encontrarnos con sentencias irracionales que por carecer de los recursos adecuados nos hagan volver al fantasma de la inflación.

Para erradicar la inflación de nuestro país tuvimos que conformar un sistema que nos permitiese vivir en estabilidad, y esto nos obligó a revisar toda la legislación voluntarista que existía en la Argentina; tuvimos que revisar una generación de gastos sin financiamiento y pensar en el presupuesto como método de control y fundamentalmente como método de restricción del gasto. Tuvimos que ordenar tanto las leyes dictadas por el Congreso —que creaban gastos sin saber de dónde saldría la plata— como las sentencias que están pensadas para un

país donde existe la piedra filosofal, y hay quienes confunden la piedra filosofal con la Casa de Moneda y creen que esta última se ha convertido en una fuente de recursos. Ningún argentino sensato puede pensar que se va a volver a ese sistema. Si un país ha renunciado a la emisión, tiene que eliminar de sus leyes la causa que da origen a esa emisión.

Por ello, en la oportunidad política que corresponda insistiremos en la definición de una iniciativa que determine claramente un sistema de reparto. Insistiremos en la fijación de movi- lidades que tengan que ver con la racionalidad del tratamiento presupuestario. Estas son cuestiones acerca de las cuales aún no hemos podido persuadir al resto de las bancadas que han integrado el plenario de las comisiones. El dictamen que nos ocupa no contiene estos anhelos que esperamos debatir nuevamente para convencer a los legisladores de la necesidad que tiene el Estado de contar con un sistema previsional que preserve el haber de los jubilados y pensionados.

Felicitó a los miembros de la Comisión de Justicia, quienes han elaborado un dictamen que perfecciona el enviado por el Poder Ejecutivo, no obstante que el capítulo vinculado a esa área ha sido aceptado casi completamente por el dictamen.

También se contempla un artículo de orden presupuestario. En este aspecto no hubo mayores disensos, salvo respecto de una propuesta efectuada por la bancada Justicialista, de reducir los niveles de endeudamiento porque el decreto de reducción de gastos dictado por el Ejecutivo —que anula la disposición de aquellas partidas que no fueron ejecutadas y que elimina del presupuesto todos los gastos no generados— ha permitido reducir el endeudamiento que preveía el proyecto original, en casi 800 millones de dólares. Este es un hecho plausible de la voluntad del gobierno para poner el gasto en caja, incluso cuando el desborde proviene de causas ajenas.

También hemos agregado un artículo que tiene efecto directo en las jubilaciones, fundamentalmente las de aquellos que perciben el mínimo y respecto de los que por largo tiempo no se les ha encontrado un mecanismo que permita corregir esos valores que, como sabemos, son escasos y para los que difícilmente hallamos la forma de obtenerles recursos que posibiliten aumentarlos.

En este aspecto hemos tomado la decisión de cambiar el destino de una partida que tiene que ver con un impuesto afectado con origen en las pólizas del INDER. Esto significa sumar

al sistema previsional de las jubilaciones de menores montos, las mínimas, las de aquellos que no poseen otro ingreso y que normalmente son asistidos, un importe de 300 millones de pesos. Si bien esto no será una solución significativa, constituirá un aporte que mejorará esas jubilaciones mínimas en hasta un 20 por ciento en algunos casos. Es un esfuerzo que hacemos por medio de un financiamiento genuino y permanente, en función de un impuesto interno que se recauda con afectación al sistema previsional. Este es el acuerdo que pudimos lograr, el máximo acuerdo que todas las bancadas hemos respetado para llegar a la celebración de esta sesión.

Quiero finalizar agradeciendo el esfuerzo de todos, las largas reuniones, la paciencia de los señores diputados, las demoras en las reuniones de comisión para la búsqueda de un renglón más de acuerdo y la buena voluntad que han puesto todos para llegar a esta instancia. Con lo señalado solicito a la Cámara la sanción de este proyecto. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Machado. — Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos a fundamentar la aprobación en general del dictamen emitido esta misma tarde por el plenario de las comisiones, y también a marcar las disidencias en particular, que expresaremos con mayor profundidad en la instancia permanente.

Como señaló aquí el señor diputado preoponente, al ingresar al Parlamento este proyecto tenía como característica la incorporación de distintos institutos: una reforma previsional, una modificación del sistema judicial y cuestiones presupuestarias. Desde la bancada radical marcamos claramente y lo expresamos en distintas oportunidades en el recinto los aspectos en los que estábamos en condiciones de acompañar, en forma inmediata el proyecto según el requerimiento del oficialismo, y aquellos otros puntos donde teníamos disidencias: en este sentido dimos las razones para no aprobar el proyecto.

Así queremos reiterar que desde el radicalismo no estábamos dispuestos a aprobar ni facilitar el tratamiento de una iniciativa que limitara unilateralmente la responsabilidad del Estado hacia el régimen previsional y que modificara sin datos suficientes, sin el tiempo justo para el debate, el marco del cuadro de recursos y gastos del citado sistema. Sin duda éste fue y sigue siendo el punto central de disidencias entre las bancadas y por ese motivo es que hoy no estamos tratando tal cuestión del proyecto.

No queremos decir con esto que si en el futuro se cumple el requisito de determinar con exactitud el nivel de recursos y de gastos con que va a contar el sistema previsional, no estaremos en condiciones de avanzar para que con tales fondos, provenientes de los aportes, de las contribuciones y de las afectaciones impositivas, se responda a los gastos del régimen jubilatorio.

De ninguna manera podemos aprobar una normativa a la que se le han detruido recursos de la coparticipación impositiva comprometida a las provincias, y a la que se le han aumentado unilateralmente los gastos con el traspaso de las cajas deficitarias de las provincias y con el resgate anticipado de Bocones.

Por eso creemos que una cuestión mínima de responsabilidades nos debe llevar a marcar aquellos puntos que requieren inmediata respuesta en este sentido para que el Poder Ejecutivo tenga la facultad y la posibilidad de asumir sin sobresaltos los pagos del sistema previsional.

Hemos requerido, tal como ha quedado expresado en el proyecto aprobado anteriormente, que esta facultad debía limitarse a ampliar los créditos destinados en forma exclusiva al pago de jubilaciones y pensiones. Porque insistimos en que buena parte de ese déficit que aquí se pretende enmarcar exclusivamente como consecuencia de las sentencias judiciales, que se tilde de abusivas, ha provenido de medidas que recortaron esos recursos o aumentaron los gastos, y no solamente por causa de las sentencias judiciales.

Por eso señalamos desde el comienzo que estábamos dispuestos a votar los topes y también a que la ANSES fuera parte en los juicios; que se incorporara un capítulo integral de reforma que mejorara el sistema de defensa en juicio, y también que se dispusiera la ampliación de los créditos presupuestarios.

Por el contrario, no estábamos dispuestos a aprobar desde nuestro bloque la limitación del resabio, la estafa del reparto, porque entendíamos que se profundizaba la crisis del sistema. Tampoco estábamos dispuestos a votar la forma de movilidad que limitaba un derecho que quedó subyacente en la sanción de la nueva ley previsional. En lo referente a la cuestión impositiva no estábamos dispuestos a aprobar el gravamen a los profesionales, que tiende a destruir más de sesenta cajas de profesionales que funcionan en forma eficiente en nuestro país y a las que de alguna manera se buscaba perjudicar, para favorecer el sistema privado de capitalización. También estábamos dispuestos a aprobar las contri-

buciones impositivas a recaer sobre las cooperativas y mutuales, aunque desde nuestro bloque íbamos a sostener el mantenimiento del régimen que de alguna manera derogara las exenciones para jueces y legisladores, fundamentalmente con respecto a estos últimos pues en el caso de los primeros evidentemente todavía faltaba discutir acerca del sistema que en definitiva se aplicaría.

Nosotros vamos a acompañar este dictamen, pero queríamos dejar en claro cuáles son nuestras disidencias y cuáles nuestros puntos de coincidencia con respecto a él. En este sentido celebramos el grado de avance alcanzado, así como también el hecho de haber podido aprobar, luego de un trabajoso acuerdo, un dictamen en relación al cual sólo tenemos disidencias parciales.

Los diputados de nuestro bloque que integran las comisiones que participaron de la discusión del proyecto de ley, durante el debate señalarán cada una de las disidencias parciales que sostenemos con respecto a la iniciativa en tratamiento. De todas formas rescatamos el acuerdo alcanzado, que ha permitido la ampliación del crédito presupuestario y que evidentemente también ha establecido un instrumento útil para resolver una situación crítica. Asimismo destacamos que en la medida en que se cumpla con los compromisos de aportar datos suficientes y administrar exactamente tanto los recursos como los gastos del sistema previsional, estaremos en condiciones de seguir avanzando.

Reiteramos la posición del bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de acompañar en general este proyecto, señalando a la vez nuestras disidencias parciales, y además aportando herramientas útiles para que el pago a los jubilados se practique en tiempo y forma.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Caviola. — Señor presidente, manifestaré en torno de la postura del interbloque Alternativa Federal con respecto a este importante proyecto de ley cuya consideración hoy ha sido traída a este recinto.

En primer lugar quiero señalar nuestra disconformidad en relación con el mecanismo mediante el que el plenario de comisiones emitió su dictamen. Recién en el día de hoy, cuando promediaba la reunión de las comisiones, pudimos disponer del texto de un despacho que fue discutido y acordado fuera de este Parlamento y que terminó convalidándose ayer en la residencia de Olivos.

A efectos de cumplir responsablemente con nuestra labor legislativa, durante el plenario de

las comisiones solicité en forma respetuosa que se pasara a cuarto intermedio a fin de que el proyecto de ley en consideración —que es de gran envergadura— fuera medianamente estudiado, para así poder opinar de manera fundada con respecto a él. Ante este petitorio, desgraciadamente no encontramos respuesta afirmativa ni por parte del oficialismo...

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Señor presidente el señor diputado Ceballos le solicita una interrupción.

Sr. González Gaviola. — Cuando finalice con mi exposición el señor diputado tendrá oportunidad de hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: decía que a efectos de poder emitir despacho responsablemente en relación con un proyecto de esta envergadura, hubiésemos querido disponer del tiempo suficiente como para efectuar las consultas y los estudios necesarios. Desgraciadamente el pedido que formulé en el sentido de que el plenario de comisiones pasara a cuarto intermedio no fue concedido no sólo por el oficialismo —que por la presión política entendemos que esté apurado en sancionar este proyecto— sino tampoco por los diputados de la Unión Cívica Radical, quienes sorpresivamente votaron en contra de que se pasara a cuarto intermedio para que los partidos provinciales y el resto de los que no son el PJ y la UCR pudiéramos actuar responsablemente.

De la lectura superficial que hemos podido hacer de este proyecto surgen importantísimos avances con respecto al proyecto que originalmente enviará el Poder Ejecutivo nacional. Esta iniciativa contenía artículos objetables que afortunadamente han sido eliminados tal como se los había propuesto.

De todos modos del proyecto en consideración surge que no se trata de una norma sobre solidaridad previsional. En su articulado cuesta encontrar algún punto que beneficie a los jubilados.

Por otra parte, el capítulo referido a la reforma del procedimiento judicial —aunque no puedo dar una opinión fundada por el escaso tiempo que he contado para estudiarlo— evidencia que ante la justicia habrá tres niveles y dificultades. El primero —que es un nivel de privilegio— se refiere a la posibilidad que tiene el Estado para posicionarse ante los reclamos judiciales; el segundo está destinado a la parte empleadora, que no ve modificado el procedimiento actual; por

último está el nivel referido a los jubilados, quienes se verán sensiblemente perjudicados para reclamar por sus derechos no sólo por lo relativo al trámite que deberán realizar —que les resultará oneroso— sino también por los plazos estimados para emitir sentencia y las especificaciones que fija el Estado para dar cumplimiento a aquéllas. Esto nos hace pensar en que no resulta conveniente incluir el capítulo II, mediante el que se reforma el procedimiento judicial.

En virtud de los argumentos expuestos rechazamos el dictamen de mayoría y proponemos uno alternativo basado en el contenido del expediente 5.440-D.-94, referido a atender exclusivamente la emergencia que vive el sistema previsional mediante un incremento de partidas que hoy resultan imprescindibles.

Al mismo tiempo solicitamos que el próximo año se trabaje efectivamente en un proyecto sobre solidaridad previsional, que tenga como eje al jubilado y que evite que los recursos que deberían ser destinados al pago de sus haberes sean desviados a otros fines, ya que nos llama la atención que mientras en un proyecto se establecen limitaciones para el pago de sentencias, el ministro Cavallo renuncie al cobro de 1.750 millones de pesos —que deberían beneficiar al sistema previsional— en concepto de aportes patronales y siga empeñado en perdonar en forma indiscriminada al sector de servicios y comercio.

Tampoco vemos en el señor ministro de Economía una actitud reflexiva a efectos de revisar los subsidios destinados al sector de la producción primaria, donde se confunde devolución de impuestos a sectores que realmente lo necesitan, con aquellos que no requieren de tal reintegro. No podemos dejar de tener en cuenta que ese subsidio incrementa la tasa de rentabilidad, que de por sí es superior a la razonable.

Por lo expuesto nos oponemos al dictamen de mayoría y como alternativa proponemos que lo único que se apruebe sea la autorización al Poder Ejecutivo para modificar las partidas presupuestarias en 1.291 millones de pesos a fin de cerrar el presupuesto en ejercicio, el que ha terminado desfinanciado porque el señor ministro no supo atender los reclamos y advertencias que oportunamente se le hicieran acerca de algunas de las políticas implementadas.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fernández Gill. — Señor presidente: el bloque del MODIN lamenta profundamente las

derivaciones que han surgido del acuerdo al que arribaron algunos bloques.

Entendemos que este tipo de procedimientos no honra al Parlamento porque resulta inconcebible que hace escasos veinte minutos nos entregaran el dictamen de las respectivas comisiones.

El MODIN no puede guardar silencio frente a las amenazas formuladas por el señor presidente de la Nación, quien a través de los medios televisivos y con su habitual espíritu autoritario, sin hesitación de ninguna naturaleza, adelantó que si el Congreso no aprobaba la ampliación presupuestaria requerida recurriría a dictar un decreto de necesidad y urgencia.

Todo esto es realmente lamentable, y también es de lamentar que el bloque de la Unión Cívica Radical esté mezclado en esta situación.

Los actos del Poder Ejecutivo que llevaron al actual déficit previsional ya fueron anticipados no solamente por nosotros sino también por muchos sectores del país en oportunidad de considerarse la ley 24.241 y fueron reiterados cuando se trató la ley modificatoria que lleva el número 24.347. Por lo tanto el señor ministro de Economía no puede alegar ningún tipo de sorpresa. Esto es consecuencia de su habitual tendencia a no planificar para el largo plazo; es consecuencia de improvisar, nada más y nada menos, con el sistema previsional argentino.

Ninguno de los miembros del equipo económico, desde el doctor Cavallo hasta el más insignificante de sus integrantes, puede alegar torpeza, de acuerdo con aquel principio básico del derecho según el cual las partes no pueden invocar torpeza de ninguna naturaleza. Por ello nosotros responsabilizamos directamente al señor presidente de la República y a su equipo económico por la situación a la que hemos sido llevados. Digo esto porque el sector más desprotegido del pueblo es el que está pagando este tipo de improvisaciones que sin duda se proyectan hacia el futuro.

El nombre que se le ha puesto a este proyecto constituye una irónica alegoría de lo que la iniciativa no es, lo cual ha quedado magníficamente representado por el gesto obsceno que el señor secretario Tacchi realizó en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Si hay algo que este gobierno no es para con el pueblo argentino es precisamente eso: solidario. La solidaridad implica ejemplaridad y renunciamiento; pero esta propuesta es sólo una farsa destinada a que los grandes aportantes no utilicen el sistema de reparto sino las administradoras priva-

das. Entonces, como el límite no rige para estas últimas, el sistema no es solidario sino verdaderamente discriminatorio.

Además este proyecto no tiene como verdadero objetivo el de resolver los aspectos del sistema integrado de jubilaciones y pensiones que generan un déficit estructural, sino los problemas fiscales originados en actos del propio ministro de Economía.

Esta es una propuesta peligrosa porque utiliza una técnica economicista que viola principios generales del derecho que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema republicano de gobierno. Asimismo avasalla potestades del legislador en una doble dirección al otorgar facultades excesivas tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial, rompiendo así el equilibrio republicano.

Esa situación no nos tiene que asombrar, máxime si tenemos presente la forma en la que se logró convocar a la Convención Nacional Constituyente que sesionó en la ciudad de Santa Fe merced al acuerdo secreto que en su momento hicieron el doctor Alfonsín y el presidente Menem, que para nosotros constituye un mal recuerdo.

La reforma que se está impulsando se pronunció por la crisis de la ANSES —que era absolutamente previsible—, que nació de un vaciamiento intencional orquestado desde el Ministerio de Economía.

Dada la insistencia con la que el gobierno basa sus medidas en la aplicación de la teoría de la emergencia nos gustaría que nos precisara hasta cuándo piensa prorrogarla y, sobre todo, cuál es el interés público que está tutelando, porque frente a tamaño desaliño en el uso de la técnica legislativa todas las leyes que tienen su origen en Economía indudablemente van a tener que seguir siendo corregidas.

En el año 1985 el doctor Alfonsín declaró el estado de emergencia y hoy, en 1994, seguimos en la misma situación. Además, como corolario del cinismo se pretende llegar al extremo "solidario" de no pagar mediante una interpretación forzada y extremadamente falaz de la expresión "móviles" que figura en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Sin embargo, por más que se fuerce el concepto, la movilidad jamás puede ser utilizada para no pagar, y mucho menos para negar a los jubilados y pensionados el derecho a una subsistencia digna.

El sentido de la palabra "movilidad" ha sido el de permitir que el valor de las jubilaciones se ajuste a la verdadera evolución de la tasa de

inflación. Si desde el inicio del plan de convertibilidad los alimentos y bebidas aumentaron un 66 por ciento, los medicamentos y la atención médica un 82 y el transporte un 6, las jubilaciones y pensiones, en función de ser potestad del Estado otorgar los beneficios de la seguridad social, también deberían moverse en el mismo sentido.

El gobierno no puede ensayar sus equilibrios de caja, esperando la sonrisa del Fondo Monetario Internacional, a costa de seguir sacrificando generaciones de argentinos. Es indudable que la recesión y el desempleo también son parte del problema, pero éste no tiene solución frente a una política monetaria que basa la estabilidad en la restricción del consumo. Ello responde a un modelo que hemos llamado "de transferencia de la renta nacional al exterior". No se trata de un modelo de acumulación, como ha denunciado y sigue sosteniendo inexorablemente el Movimiento por la Dignidad y la Independencia.

Con relación al artículo 1º del dictamen de mayoría, el Poder Ejecutivo deja en evidencia cuál es el verdadero objetivo de las reformas a las leyes previsionales, ya que se ha pensado establecer un tope máximo para el futuro, para así achicar el gasto con el fin de revertir el déficit del sistema previsional estatal, constituido por el sistema de reparto.

Si el objetivo fuera buscar un equilibrio con verdadera y auténtica justicia social, se habría fijado un tope mínimo; pero no está en los planes del gobierno aumentar un centavo a los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.

Reiteramos que únicamente vamos a apoyar la parte normativa que dispone el aumento de presupuesto solicitado por el Poder Ejecutivo; ello es así porque no queremos causar el más mínimo daño a los jubilados, que hoy sufren todos los perjuicios de esta economía que realmente es injusta y discriminatoria.

Al MODIN no le extraña esta actitud del ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos —junto a todos los que lo secundan—, que pretende nivelar hacia abajo y no hacia arriba. ¿Qué importancia tiene para el señor ministro esta situación! Total, él cobra su sueldo como ministro, percibe sus gastos reservados y además obtiene un subsidio de la Fundación Mediterránea, integrada por empresas como Arcor S.A., que debería ser controlada por su secretario, el doctor Tacchi, quien también es un sirviente del Fondo Monetario Internacional.

Nada de esto nos extraña por parte de quienes, en definitiva, un sirviente de las empresas multinacionales y también de las nacionales. Estas empresas están al servicio de cualquier cosa, menos de los intereses republicanos y democráticos y de los principios de justicia social que sostenemos.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos estuvo presente en el recinto y planteó vehementemente muchos de los problemas que acucian su gestión.

Se refería a varios aspectos, pero puso énfasis en denunciar el aspecto negativo que sobre el sistema de previsión social causan las sentencias judiciales y la vigencia de jubilaciones que él llama de privilegio. Me parece que en este recinto no se ha tomado de un modo definitivo esta circunstancia señalada por el señor ministro.

En su gran mayoría los integrantes de este cuerpo no dieron crédito a que fuera esa circunstancia tan vehementemente indicada la causa de las preocupaciones fundamentales.

El propio ministro planteó el aumento del gasto público, que ubicó en un 48 por ciento desde la estabilidad, no obstante que lo presentó —él mismo lo dijo— como una disminución si se lo comparaba con el incremento de la economía internacional que él obtenía por suma de rubros, lo que difícilmente podría aceptarse como una operación lógica.

Por esa razón hemos confirmado en nuestro bloque la posición asumida para los presupuestos de los años 1993, 1994 y 1995, en especial en este último caso en el que se lo presenta como equilibrado cuando al mismo tiempo se autoriza a contraer una deuda por seis mil millones de pesos sin especificar el modo de su financiamiento.

No es extraño entonces que se presenten estas situaciones que actualmente afligen al ministro y no es correcto limitarlas exclusivamente al sistema de la seguridad social.

Asimismo hay que reconocer —sin perjuicio de lo demás— que el sistema que estamos tratando acusa déficit, aparece como violentado en cuanto a su financiamiento y requiere urgentes soluciones, que en parte son las que plantea el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado a esta Cámara.

Del análisis de las disposiciones no puede dudarse que con este proyecto el Estado nacional continúa garantizando la prestación del servicio.

En su articulado se ha previsto la forma en que habrán de resolverse las sentencias condenatorias del Estado nacional y se establece que ellas serán atendidas con las partidas que anualmente asigne el Congreso al sancionar el presupuesto de la Nación.

En tales circunstancias no cabe duda de que está rigiendo un principio que no es sólo del régimen previsional y del orden jurídico sino también del orden de la civilización. Me refiero a que el Estado garantiza el cumplimiento de las sentencias que lo condenan; por lo tanto no tiene nada de extraordinario decir que la seguridad social será atendida con los recursos que esta ley depara con más aquellos otros que serán asignados en el presupuesto de la Nación.

Me parece que queda perfectamente clara la vigencia de la garantía de las prestaciones y, por lo tanto, no cabía una discusión como la que se ha presentado, donde con invocación de los conceptos de la filosofía y de la doctrina se ha pretendido encontrar en dos o tres artículos de esta norma una deformación de sistema que, de todas maneras, está rigiendo en las disposiciones normativas que la informan.

Tengo mucho respeto por las opiniones que se han vertido y por las posiciones que considero absolutamente legítimas y honestas. Pero me parece que el país real estaba esperando la sanción de la ley. Agotadas las discusiones y expresadas con libertad las opiniones, debemos subrayar que existe una mayoría en esta Cámara dispuesta a sancionar la norma y no a votar simplemente en general un despacho desarticulado elaborado en comisión.

No sé si cubrimos nuestra responsabilidad política en esta hora difícil limitándonos al trámite de una votación en general y aplazando para un futuro impreciso la sanción de normas que pueden ser aprobadas en el día de hoy. En este sentido hay aspectos que nosotros podemos aceptar dentro de esta casa, como un modo de resolver un incidente parlamentario, pero que son difícilmente comprensibles fuera de este ámbito. Agotadas las discusiones se espera de nosotros una decisión para que esto no quede planteado como una cuestión en forma imprecisa cuando todos estamos convencidos de que se trata de un tema que es necesario resolver. Por lo tanto no se espere comprensión del argumento de que los dos tercios que hoy no se pueden obtener obligan a postergar el asunto para un momento muy próximo, si se prorroga el período de sesiones extraordinarias, momento en el cual ya no será necesaria esa mayoría como una exigencia parlamentaria.

En los próximos días veremos la opinión que merece esta actitud de no resolver las cuestiones que deberían ser solucionadas en el día de hoy.

Destaco, como hicieron otros oradores, las tareas cumplidas en esta casa para tratar de obtener lo posible. En tal sentido la Comisión de Justicia que presido ha participado del primer plenario de comisiones y celebró luego dos reuniones propias en las que tuvo lugar un amplio debate con la participación de entidades interesadas como las cajas profesionales, los funcionarios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y los miembros de la Cámara de la Seguridad Social. Justamente por esa labor desempeñada por la comisión que tengo el honor de presidir ha sido posible desarrollar un estudio pormenorizado del tema, efectuar propuestas de modificación y aceptar muchas de ellas. Por ejemplo, el capítulo referido al procedimiento judicial es uno de los que en forma completa integra el cuerpo del despacho elaborado por el plenario de las comisiones. Allí se resolvió finalmente no atender el requerimiento de crear salas en el tribunal competente para dejar esta cuestión para que una ley específica, y también con el objeto de que no se piense que se crean salas por el mero hecho de que al poder administrador no le gusta el contenido de los fallos que dictan los tribunales. Esto fue planteado en la comisión por varios señores diputados y resuelto con la exclusión de esa previsión de las normas que tratamos.

También se ha logrado que la primera instancia se pueda tramitar hasta la sentencia en la provincia donde tenga domicilio el interesado; y en cada paso del procedimiento judicial se han propuesto los artículos como han resultado de este amplio diálogo y como fue informado con amplitud hoy en la reunión plenaria de las tres comisiones intervinientes.

Según mi criterio hay otras cuestiones que tratar en la discusión en particular para conocer el papel que tendrá esa primera instancia y el tema de la ejecución de las sentencias definitivas —cuestión que no ha quedado perfectamente analizada—, pero de todos modos corresponde destacar el amplio consenso logrado en este capítulo.

Reitero que esta norma es fundamentalmente para debatir en particular, pudiéndose apreciar en esa instancia que en las diferentes disposiciones está vigente el principio que aquí se ha debatido. Se pretende crear un modo cultural distinto, en el sentido de que debe haber un concepto presupuestario para las prestaciones de la seguridad social. Pero eso no quiere decir que

el régimen, tal como está propuesto, desconozca la garantía última que el Estado otorga a las prestaciones correspondientes.

En el entendimiento de que la discusión en particular es lo fundamental en una iniciativa de esta naturaleza —y me parece que para ello tendremos que esperar todavía un tiempo más—, y con el deseo de no fatigar más la atención de la Honorable Cámara, doy por concluida mi exposición.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: en oportunidad de debatir el proyecto de ley de presupuesto para 1995 comenzamos nuestra exposición haciendo una reflexión acerca de los inconvenientes que tuvimos en su tratamiento. Al considerar hoy un tema tan importante debemos empezar del mismo modo. No afirmamos esto porque no hayamos tenido oportunidad de estudiar el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, sino porque no hemos podido dar lectura a lo que hoy se está sometiendo a nuestra consideración.

Esto ya ha sido resaltado por algunos oradores que me han precedido en el uso de la palabra y no quiero ser reiterativo, pero nuevamente quiero manifestar la necesidad de participar que tenemos los representantes del pueblo de la Nación Argentina en las deliberaciones de las comisiones respectivas. Pareciera ser que en estas comisiones hay miembros de primera y miembros de segunda. Quizá piensen con un alto grado de soberbia que otros no podemos aportar ninguna idea, que ellos tienen el monopolio de la verdad y que nosotros nada podemos hacer para mejorar las iniciativas. Pero, como veremos más adelante, esta verdad revelada que pareciera tienen los redactores de la norma no es tan así. Ya vamos a ver algunas incongruencias.

Se ha hablado de los acuerdos alcanzados entre algunos sectores que componen esta Cámara; incluso no sé si son entre los dos bloques mayoritarios, pero a lo mejor, si el bloque oficialista hubiese tenido interés en avanzar aún más en la propuesta que vino del Poder Ejecutivo, hubiera encontrado mejor respuesta en muchos legisladores que no tuvimos la posibilidad de participar en este análisis.

Se habló también de urgencias, quizá como un pretexto para reducir el análisis. En este tema de las urgencias se podría haber avanzado mucho más rápido dando sanción al reclamo del Poder Ejecutivo en la ampliación de partidas e imputación del gasto en el presupuesto del año 1994, como le dijéramos al señor secre-

tario de Hacienda cuando visitó la Comisión Presupuesto y Hacienda para considerar la iniciativa presupuestaria de 1995. Esto también lo manifestamos en el tratamiento de otras normas legislativas.

Recuerdo las múltiples discusiones en la Comisión de Finanzas para lograr la sanción de ley del cheque. En este instante vale reflexión sobre algo que decíamos en aquel entonces; decir, ¿por qué no votar rápidamente aquello lo que estamos todos de acuerdo y que el país está reclamando?

Existía una iniciativa que tenía sanción en el Senado para restituir inmediatamente el endoso del cheque, reclamo unánime de todos los sectores de la economía nacional. Pasaron muchos meses y todavía está pendiente esa sanción, por lo que el endoso no se pudo restituir. Muchos meses han pasado y ya se podría haber resuelto la ampliación del presupuesto y la modificación de la imputación del gasto, pero lo que es que estamos inmersos en esta discusión en el Poder Ejecutivo nacional, que no le hace nada bien al sistema político argentino.

Si bien hay temas que los trataré durante la consideración en particular, no puedo dejar de señalar lo siguiente; por ejemplo, en el actual artículo 1º —que era el segundo en la iniciativa del Poder Ejecutivo—, cuando se plantea modificar el artículo 17 de la ley 24.240 después de decir cuáles serán las prestaciones que existirán en el sistema, se dice que “En ningún caso las prestaciones a cargo del Régimen de Reparto en favor de cada beneficiario podrán ser inferiores a los importes mínimos...”

No puedo dejar de señalar en esta lectura que estoy haciendo que las prestaciones siempre son a favor de cada beneficiario. Es decir, no existen prestaciones que sean en favor de alguien que no sea beneficiario de ella.

Entonces comenzamos la redacción de esta importante iniciativa con una gran confusión que puede traer graves inconvenientes en la medida en que se pretende introducir modificaciones en los futuros beneficios.

Otras redacciones también inducen a confusión. ¿Cómo será el sistema para lograr que los mayores ingresos que se perciban en el futuro sirvan para atender las prestaciones de menos de 450 pesos o de aquellos que tengan como único medio de vida el beneficio del sistema?

Ya lo hemos repetido en este recinto en más de una oportunidad. Pareciera que se quiere utilizar la modificación del sistema previsional para crear falsas expectativas, ilusiones que

señores legisladores saben que no se podrán cumplir ni en el corto ni en el mediano plazo.

Hemos señalado con claridad que pretender el pago de 450 pesos como mínimo a todos los beneficiarios del sistema significa modificar la situación de 2.820.000 casos que hoy reciben un importe menor; significa que tendremos que incorporar a esta partida presupuestaria 669 millones de pesos mensuales, que anualizados representan más de 8.032 millones de pesos.

Esta referencia numérica sirve para ilustrar acerca de que nada de esto ocurrirá en el corto ni en el mediano plazo, como he dicho.

Sr. Santín. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Balter. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. — Señor presidente: quería aclarar al señor diputado en uso de la palabra que el artículo referido a los 450 pesos como expresión de deseos no figura en el dictamen. Fue eliminado hoy en la reunión conjunta que se llevó a cabo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Seguramente el señor diputado debe tener en su poder un dictamen anterior.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: agradezco la interrupción realizada por el señor diputado proponente porque ha sido muy útil la aclaración.

Hago notar que tengo en mi poder el dictamen que se distribuyó entre los legisladores un minuto antes de levantarse la sesión conjunta de las tres comisiones y esto figura en el inciso c.) del artículo 2º.

Seguramente no tendremos derecho a conocer el último dictamen. Esto es posible y por eso inicié mi exposición de esta forma. Sucede que aunque tengamos interés o vocación de servicio y estemos siempre presentes en la casa, en las comisiones o en el recinto, en muchos casos no conocemos qué es lo que estamos tratando.

Sr. Santín. — El dictamen fue modificado esta mañana en comisión.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Ruego a los señores diputados no dialogar.

Sr. Balter. — Señor presidente: en este punto quisiera hacer una reflexión acerca de cómo se van planteando las urgencias del Poder Ejecutivo y sus exigencias con respecto a esta Cámara de Diputados. Sin duda estos no son hechos novedosos.

¿Por qué tenemos que llegar, con este apresuramiento y con esta presión, a modificar una cuestión tan importante sin esperar la posibilidad real de debatir, estudiar y quizás aprobar un texto que vaya aún más allá de lo que quiere el Poder Ejecutivo?

En su oportunidad nos visitó el señor ministro de Economía y brindó una extensa exposición. Tanto él como su colega de Trabajo señalaban siempre un ejemplo acerca de las sentencias judiciales. Pareciera que recién entonces se estaban notificando de los inconvenientes que traían las decisiones judiciales en las finanzas de la República.

Si se hubiese tomado la precaución de hacer el análisis en el momento en que nosotros estábamos tratando el presupuesto de 1995, los integrantes del gabinete económico podrían haber dado respuesta a muchos de los interrogantes que nosotros realizábamos en la comisión.

Voy a comparar los elementos que tenían los ministros de Economía y de Trabajo para ir previendo y tomando un camino de alternativa distinto al que hoy nos vemos obligados a recurrir. Según el informe oficial del Ministerio de Trabajo, si comparamos el período de enero a septiembre de 1993 —y tomo esta fecha porque es el momento en que nos visitaron las autoridades— con respecto al mismo período de 1994, se observa claramente que se habían dictado en 1993 sentencias en 9.622 casos, mientras que eran 25.007 casos los existentes a septiembre de 1994. Esto implicaba en aquel momento —1993— una erogación de 299.808.900 pesos, en tanto que en 1994 ya estábamos en 624.997.224 pesos.

Esto nos sirve para marcar dos cosas: la primera, los elementos que ya tenían para prever esta situación con anterioridad; y la segunda, que el promedio de los casos en ninguna medida reflejaba el ejemplo que ponía el señor ministro en este recinto. Porque si observamos cuál ha sido la media de estas sentencias, nos da 24.993 pesos. Se pagaron 150 millones en efectivo y 474 millones en bonos.

Estos datos son ilustrativos para reflejar una actitud que también nos lleva a llamar al orden al Poder Ejecutivo a fin de que la relación entre estos dos poderes sea más armoniosa.

También estamos considerando un proyecto que exige modificaciones en el presupuesto de 1995 porque establece que será atendido con las partidas presupuestarias que para este fin se le asignen a las sentencias de la seguridad social. Y sabemos que estas partidas no están incluidas en el presupuesto que hemos votado en su oportunidad. Ya deberíamos saber de qué

montos estamos hablando para que después no tengamos estas urgencias y se diga que el Estado no puede cumplir porque los legisladores están en mora. Si se nos hubiese invitado a participar de esas discusiones a las que no tuvimos acceso, seguramente hubiéramos acompañado los planteos de tipo impositivo mediante algunas modificaciones, y en el proyecto que ahora estamos tratando estarían incorporados algunos de los puntos de la iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo, que hoy no podemos tratar. Como bien se ha dicho, podríamos decir que el único capítulo que se mantiene completo, aunque con algunas diferencias y matices, es el que ha analizado la Comisión de Justicia. Cuánto me alegra que en ella se haya discutido plenamente, que haya habido muchas sesiones y que se haya convocado a todos los involucrados en esta cuestión.

Tampoco puedo dejar de manifestar la enorme satisfacción de saber, por ejemplo, que un diputado de mi provincia, un comprovinciano conocedor de esta problemática y con sensibilidad —el señor diputado Leopoldo Orquín— haya sido quien impulsó una modificación con el objeto de que en las provincias también se pudiera sustanciar este tipo de cuestiones judiciales, evitando así el tener que recurrir siempre a la Capital Federal.

Nuevamente hemos tratado de preocuparnos de que los métodos para establecer las comisiones fueran modificados, e insistimos en ello. Como señalé en oportunidad de la consideración del proyecto de ley sobre costas judiciales, seguramente seguiremos predicando en el desierto; pero no vamos a desistir de este intento, señor presidente. No vamos a claudicar en reclamar nuestra participación en el análisis de las iniciativas. No nos vamos a cansar de plantear cuestiones en el recinto, aunque los señores legisladores estén más preocupados en hablar a través de sus teléfonos celulares o en realizar comentarios de cualquier naturaleza, que nada tienen que ver con el tema que estamos considerando. Vamos a insistir en reclamar a todos los señores diputados que podamos analizar en profundidad las leyes que el país real está reclamando. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. — Señor presidente: en primer lugar debo aclarar que no tenía intención de participar en este debate; pero algunas consideraciones que se han hecho en función del procedimiento y de la búsqueda de consenso, y otras expresiones que han sido vertidas prácticamente como imputaciones políticas con res-

pecto a la posición del bloque que integro, me obligan a plantear sintéticamente algunas cuestiones.

Es absolutamente indispensable que refresquemos la memoria de esta Cámara para que todos sepamos y nos hagamos cargo de cada una de las actitudes asumidas en torno a las leyes que han tenido incidencia en el régimen de la seguridad social.

Cuando se sancionó la ley 24.241 advertimos que el cambio de un sistema puramente estatal a otro mixto iba a provocar el desfinanciamiento del sistema de reparto. En esa oportunidad, en primera instancia se llegó a un consenso dentro del propio bloque oficialista a efectos de poder emitir un dictamen. El bloque radical se opuso y no dio quórum, lo que motivó que aquel consenso logrado se ampliara con la participación de legisladores de otros partidos políticos. Nosotros continuamos oponiéndonos y no dando quórum, pero cuando éste se alcanzó, como ocurre aquí y en cualquier Parlamento del mundo, tuvimos en cuenta que quien logra quórum tiene no sólo la legalidad sino también la legitimidad para considerar un tema.

En este caso, el consenso ha sido posible no porque haya algún acuerdo bendecido en otro lugar que no sea este ámbito —como se ha pretendido decir— sino porque fueron muchas las horas de trabajo y discusión destinadas a arribar a un dictamen. Es cierto que la mayoría de las discusiones se llevaron a cabo entre el oficialismo y la segunda minoría, pero ésa es la forma en que se buscan acuerdos aquí y en cualquier Parlamento del mundo.

Además, en otras oportunidades, cuando el oficialismo no ha logrado consensuar algún tema con el bloque de la Unión Cívica Radical, lo ha hecho con otras representaciones políticas y nosotros no hemos venido aquí a llorar sobre la leche derramada por haber sido excluidos de las decisiones que tomaron las mayorías circunstanciales que se constituyeron.

Cuando se consideraron los dos pactos federales fiscales que destinaron recursos de las provincias al financiamiento del sistema de seguridad social nacional, planteamos nuestras prevenciones no sólo por el mecanismo que se utilizaba sino por la posibilidad de que se desviarán los fondos. Ello motivó que el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos se hiciera presente en este recinto, donde manifestó que el déficit presupuestario del corriente año se debía exclusivamente a las sentencias judiciales. Per supuesto, ha quedado demostrado que dicha afirmación era inexacta.

En esa oportunidad el señor ministro presentó a la consideración de la Honorable Cámara un proyecto mediante el cual —a su entender— el Poder Ejecutivo resolvía el problema del sistema de seguridad social, teniendo sólo en consideración que las cuentas públicas cerraran, pero dejando de lado la responsabilidad que el Estado tiene en el funcionamiento del régimen de reparto solidario.

Si comparamos sintéticamente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el contenido en el dictamen en consideración, rápidamente podremos darnos cuenta de que el Parlamento ha tenido posiciones conjuntas, más allá de cómo se encontraron las mayorías para firmar este dictamen.

También considero importante precisar en este momento que no estábamos dispuestos a aceptar —como seguramente no lo estaba ninguno de los bloques políticos— que se duplicara el aporte de los profesionales de los regímenes provinciales, cosa que ahora no figura en el dictamen porque entendimos que una modificación tributaria merece otro tipo de discusión. Este bloque tampoco estaba dispuesto a aceptar la imposición del impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales, cuestión que tampoco figura en el dictamen.

Esa fue la posición que adoptó nuestro bloque desde un primer momento. Estábamos dispuestos a otorgar los mecanismos legales presupuestarios para que se pudiera cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones del año 1994, y esto no sólo figura en este proyecto sino también en otro contenido en un dictamen que hemos aprobado por unanimidad.

Por otro lado, y a raíz de nuestra concepción sobre el funcionamiento solidario del sistema previsional, entendimos que era necesario que las jubilaciones tuviesen topes máximos. También estábamos de acuerdo con establecer deducciones progresivas para aquellos regímenes que tuviesen derechos adquiridos y que superaran el tope de 3.100 pesos.

Prácticamente todos los sectores han valorado y reivindicado el esfuerzo, el trabajo y la participación de la Comisión de Justicia en los procedimientos judiciales previsionales, razón por la cual me voy a excusar de hacer referencia a ese capítulo.

Pero hay otro tema que considero que es importante destacar. En el dictamen aprobado en el día de hoy en el plenario de las tres comisiones que tuvieron injerencia en el tratamiento de este asunto, hemos destinado aproximadamente 1.500 millones de pesos más para el

sistema público de reparto. Esto debemos destacarlo y tenerlo en cuenta.

Por otra parte, se podrá decir que era necesario que existiera un mejor procedimiento, pero nadie desconoce las urgencias que había en torno a esta cuestión. Todos tienen derecho a reclamar una mejor forma de tratamiento, pero también, sabemos —esto no es nuevo— que cuando se inicia la confrontación de ideas para lograr algún tipo de consenso se conoce el inicio del camino pero no el final.

Muchas veces ese consenso se obtiene con unos y otras veces con otros, pero cuando como en este caso formamos parte de esa búsqueda del consenso para resolver los problemas del pago de las jubilaciones y pensiones no tenemos nada de qué espantarnos o avergonzarnos. Por el contrario, cuando fueron otros los legisladores que prestaron su acuerdo y el quórum que permitieron la sanción de normas a las que nos hemos opuesto, tampoco hemos llorado sobre la leche derramada. A lo sumo hemos planteado nuestra posición y aguantamos el resultado alcanzado.

En nombre de las formas no podemos disminuir el fondo del consenso que permitió este dictamen. Creo que aquí no ha habido nadie que haya estado excluido en función de los tiempos. Si alguien puede sentirse fortalecido por este dictamen, se trata del Parlamento en su conjunto. Con acuerdos y desacuerdos —algunos reflejados en la norma ya aprobada y otros cuyo debate postergaremos—, todos tendremos la oportunidad de hacer escuchar nuestras ideas y proponer nuestras conclusiones en cada uno de los temas que se están discutiendo. *(Aplausos.)*

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde votar en general.

Sr. Estévez Boero. — Solicito que la votación se realice en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—No resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: habiéndose votado el proyecto en general, correspondería su tratamiento en particular. Previo a que ello ocurra deseo formular una moción de orden prevista en el inciso 7º del artículo 108 del reglamento, que establece que se puede aplazar la consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado, en la medida en que la Cámara así lo resuelva por simple mayoría.

Entonces solicitó que el tratamiento en particular de esta iniciativa sea diferido para la sesión de tablas que el cuerpo celebrará el miércoles 8 de febrero de 1995 o para las sesiones subsiguientes, si la primera que he mencionado no se concretara.

Voy a fundar esta petición. El bloque Justicialista siempre se ha enorgullecido cuando ha logrado consensos en la Cámara de Diputados, en la medida en que ellos fuesen amplios, transparentes y explicables.

Felizmente esta Cámara ostenta un gran número de consensos logrados en distintas oportunidades y sobre temas diversos, que han permitido avanzar al país y encontrar soluciones dentro del ámbito de la democracia y de las instituciones y en la forma en que los cuerpos colegiados definen sus cuestiones.

Hoy estamos haciendo algo que en principio aparece como insólito, pero ello es así sólo porque no lo hicimos en más oportunidades. El procedimiento adoptado es totalmente reglamentario.

Hemos llevado a cabo una discusión en general y de acuerdo con lo que establece con absoluta claridad nuestro reglamento en su artículo 126, la discusión en general de un proyecto significa hablar sobre la idea fundamental, sobre su contenido en sentido amplio, sin particularizar.

Con su voto afirmativo esta Cámara ha decidido legislar sobre el sistema previsional para mejorarlo teniendo en cuenta las ópticas respetadas y respetables de cada uno de los señores diputados. La voluntad política ha sido la de avanzar en el tratamiento de un tema para el cual la sociedad pide soluciones al Parlamento.

Hasta aquí hemos llegado; el nivel de consenso logrado sólo nos ha permitido avanzar hasta este punto. Hoy no están dadas las condiciones políticas para avanzar como seguramente quieren tanto el bloque Justicialista como otros bloques. Es posible que algún "bloquecito" político desee que no se avance en esta cuestión, pero nosotros nos decidimos por lo positivo. Vamos a resolver hacia adelante y esperamos lle-

gar al próximo 8 de febrero habiendo utilizado el tiempo disponible en la búsqueda del consenso que aún no hemos logrado.

De todas maneras, a modo de síntesis, debemos señalar los acuerdos que se han logrado y las mejoras introducidas en el proyecto original, todo lo cual ha sido producto de un trabajo abundante, generoso y transparente. Nadie trabajó a escondidas; se realizaron consultas con los bloques políticos que habían decidido avanzar en este tema y es así que se lograron mejoras importantes, que según nuestra óptica no son las suficientes, pero que tal vez lo sean desde el punto de vista de otro bloque político. Ese es el juego del funcionamiento de las instituciones y por eso nos parece que está bien y que es necesario que así ocurra.

Estamos dando un muy buen mensaje a la sociedad argentina al decirle que la Cámara de Diputados de la Nación ha tomado la firme decisión —así lo ha expresado por medio de una votación— de avanzar para resolver el problema de los jubilados.

Probablemente a esta hora —si es que los senadores logran un mínimo de agilidad, tal como se ha hecho en esta Cámara— sea ley de la Nación la autorización dada al Poder Ejecutivo para que cuente con los recursos suficientes para pagar los haberes del mes de diciembre y el sueldo anual complementario de los más de tres millones de jubilados de nuestro país.

Se presentó una urgencia y la resolvimos ahora tenemos el tiempo mínimo suficiente para la búsqueda de un nivel de consenso que no permita —por medio de las explicaciones que daremos y las que recibiremos— encontrar soluciones para el tema —por dar un ejemplo— de la movilidad, en el que no hemos logrado un acuerdo.

En el tema de las jubilaciones máximas hemos encontrado una solución que en mi opinión es buena, satisfactoria y presentable. ¿Por qué vamos a ser pesimistas y pensar que no encontraremos mejores soluciones si hemos encontrado algunas buenas? Este es el único sentido de la moción de orden que he formulado. Se trata de una petición hecha dentro de los términos reglamentarios pero con un fundamento político, explicable ante la sociedad.

Para finalizar mi exposición voy a reiterar las palabras que pronunciara al inicio de mi discurso: el bloque Justicialista se enaltece y enorgullece cuando logra consenso en beneficio de todos los habitantes de nuestro país. (Aplausos)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Vicchi. — Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Ibarreche. — Señor presidente: simplemente quiero pedir una aclaración al señor presidente de la bancada Justicialista, quien en su argumentación para formular la moción de orden señaló que no se estaba en condiciones políticas para avanzar sobre la resolución integral del tema.

Quisiera llevarme la tranquilidad de que si esta solución política no surge de esta Cámara tampoco emanará del ámbito del Poder Ejecutivo. No olvidemos que en los últimos tiempos las notas periodísticas nos han informado acerca de una permanente y diría casi extorsiva actitud del Poder Ejecutivo de amenazar por medio de decretos de necesidad y urgencia ante la falta de dinámica de este cuerpo.

Nosotros participamos del consenso al que se ha arribado. Creemos que esta "super ley" —inconstitucional e ilegítima en la mayoría de sus pretensiones— ha sido soslayada. En consecuencia, la actitud constructiva de esta Cámara ha sido precisamente la de evitar que se transforme en ley el proyecto bosquejado por el Poder Ejecutivo.

Quiero llevarme la tranquilidad de que esta *impasse* hasta el 8 de febrero no traerá aparejadas otras sorpresas de naturaleza política.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: nuestro bloque también apoya la moción formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: en nombre de bloque Alternativa Federal adherimos a la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por La Pampa.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

7

MODIFICACION DEL REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO

(Orden del Día N° 1.113)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social han considerado el mensaje y proyecto de ley modificatorio del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), reglamentando el "período de prueba", el "contrato de trabajo a tiempo parcial", el "contrato especial de fomento de empleo", y el "contrato de aprendizaje"; y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Incorpórase como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976), el siguiente:

Artículo 92 bis: *Período de prueba.* El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba, durante los primeros tres (3) meses. Los convenios colectivos de trabajo podrán ampliar dicho plazo hasta seis (6) meses. En ambos casos se aplicarán las reglas siguientes:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado con período de prueba, por el mismo empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de esta ley y en el Sistema Único de Registro Laboral.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeña, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
5. El empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.
6. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos

los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

7. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

8. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer porcentajes en relación a la contratación de trabajadores a prueba así como la prioridad para el ingreso en el supuesto de incremento de la planta efectiva.

Art. 2º — Agréguese como artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976), el siguiente:

Artículo 92 ter: *Contrato de trabajo a tiempo parcial.*

1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.

2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley.

3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.

4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de obra social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en materia de salud, aportando el Estado los fondos necesarios a tal fin, de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme lo determine la reglamentación.

5. Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa.

contratación de trabajadores mayores de 40 años, discapacitados, de mujeres y de ex combatientes de Malvinas, bajo las siguientes condiciones y efectos:

1. Este contrato especial, que deberá celebrarse por escrito y registrarse en el libro del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976) y en el Sistema Único de Registro Laboral, tendrá una duración mínima de seis (6) meses prorrogables por períodos de seis (6) meses y una duración máxima de dos (2) años. No se requerirá el registro que se refiere el artículo 18, inciso b) de la ley 24.013.

2. Los empleadores que celebren este tipo de contratos serán eximidos del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, excepto obras sociales. El Poder Ejecutivo, podrá suprimir o modificar estas exenciones con carácter general o por áreas geográficas, actividades o categorías de beneficiarios determinadas.

3. Estos contratos se extinguirán por el mero cumplimiento del plazo pactado sin necesidad de otorgar preaviso y la extinción no generará obligación indemnizatoria alguna a favor del trabajador.

4. Salvo lo que se pactare en convenio colectivo de trabajo, la ruptura del contrato de trabajo por el empleador antes del vencimiento del plazo pactado sin causa justificada dará lugar a aplicación del artículo 245 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976).

5. La condición de discapacitado o ex combatiente de Malvinas deberá acreditarse mediante certificado expedido por la respectiva autoridad competente.

Art. 4º — *Contrato de aprendizaje.*

1. El aprendizaje es una relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo generando los derechos y obligaciones que se especifican en el presente, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. La relación de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una duración máxima de veinticuatro (24) meses.

3. Podrán participar de este tipo de relación:

a) Los empresarios que se inscriban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumplan con los demás requisitos que establezcan para cubrir la diversidad de situaciones;

b) Los jóvenes sin empleo entre catorce (14) y veinticinco (25) años.

4. Los empresarios suscribirán, en cada caso, contrato obligándose a satisfacer la finali-

Art. 3º — *Modalidad especial de fomento del empleo.*
Como medida de fomento del empleo se autoriza la